

Acredito pago recaudos de ley

Juzgado en lo Civil y Comercial Común I.

Centro Judicial Monteros.

Juicio: Sesto Cabral Maria Eugenia y Gonzalez Exequiel Elias c/ Sotillo Silvio Carlos y ot. s/ Amparo. Expte. 149/23

Eduardo Sixto Martinez Folquer, en representación de Bioenergía Santa Rosa SA y Temas Industriales SA, a V.S. respetuosamente digo:

Vengo por el presente a adjuntar comprobante de pago de recaudos de ley.

Proveer de conformidad,

Sera Justicia



Comprobante de pago
CAJA DE PREV Y SEG SOC DE ABOG Y PRO

Importe **\$ 11800.00**

CFT 0% **\$ 0**

TOTAL **\$ 11800.00**

Fecha	Hora	Nro. Trans.
18/10/2023	15:55:06	260815544

Medio de pago	DNI
Visa Debito	21745486

Nro. de referencia
1143154

Conceptos
MARTINEZ FOLQUER
EDUARDO SIXTO (MAT. 3664)
149/23 - JUICIOS SUMARIOS —
\$ 11,800.00
ORDINARIOS —
SUMARISIMOS Y ESPECIALES —
—

COMPROBANTE DE PAGO VÁLIDO.
CONSERVELO.

EL PAGO ESTÁ SUJETO A IMPUTACIÓN DE LA ENTIDAD



Comprobante de pago
COLEGIO DE ABOGADOS DEL SUR

Importe	\$ 4000,00
CFT 0%	\$ 0
TOTAL	\$ 4000,00

Fecha	Hora	Nro. Trans.
18/10/2023	15:52:08	260814984

Medio de pago	DNI
Visa Debito	21745486

Nro. de referencia
20231018155105COLABOGSUR2858PJ751248

Conceptos
149/23: Bonos Profesionales Ley
6023 (Sur)

COMPROBANTE DE PAGO VÁLIDO.
CONSÉRVELO.

EL PAGO ESTÁ SUJETO A IMPUTACIÓN DE LA ENTIDAD



Comprobante de pago
PODER JUDICIAL DE TUCUMAN TASA DE JUSTICIA

Importe	\$ 70.00
CFT 0%	\$ 0
TOTAL	\$ 70.00

Fecha	Hora	Nro. Trans.
18/10/2023	15:50:51	260814440

Medio de pago	DNI
Visa Debito	21745486

Nro. de referencia
20231018154825TASAJUSTIC90740PJ751247

Conceptos
149/23: Tasa por presentación de Juicio (Apersonamiento)

**COMPROBANTE DE PAGO VÁLIDO.
CONSERVELO.**

EL PAGO ESTÁ SUJETO A IMPUTACIÓN DE LA ENTIDAD

CENTRO JUDICIAL MONTEROS
Juzgado en lo Civil y Comercial Común I



H3020162278

En los autos del rubro que se tramitan por ante éste Juzgado en lo Civil y Comercial Común, Centro Judicial Monteros, a cargo de la Dra. Luciana Eleas, Secretaría a cargo de la Dra. María Rocío Guerra, se ha dispuesto dirigir el presente a fin de que tenga bien dar cumplimiento con lo ordenado en providencia de fecha 25/1/09/2023 que en su parte pertinente a continuación se transcribe: "Monteros, 25 de septiembre de 2023. (...) **3-** Los actores requieren también informe a **Facultad de Medicina Cátedra de Toxicología**(...). En efecto, quedarán redactadas en los siguientes términos: **¿**Cuáles son las distancias recomendadas para la fumigación terrestre con agroquímicos sin que esas sustancias representen peligro de daño para la salud humana a corto, mediano y largo plazo? **b)** **¿**Cuáles son las posibles consecuencias para la salud humana a corto, mediano y largo plazo, cuando esas distancias de aplicación de agroquímicos no son cumplidas?. **c)** Respecto de los agroquímicos glifosato (análogo de la glicina, N° de CAS:1071-83-6); herbicida Starane (1-metilheptil éster del ácido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético en equivalentes de ácido fluroxypyr) y MSMA (metil arsenato monosodico, herbicida órgano arsenado N° de CAS 2163-80-6), informe en cada caso: * **¿**Cuál es el riesgo para la salud humana en caso de contacto directo a 0 metros? * **¿**Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas? * **¿**Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto repetitivo y cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas por varios meses) con ese agroquímico? **d)** Respecto al agroquímico 2,4D, ácido 2,4 dicloro fenoxiacético, herbicida hormonal auxínico, N° de CAS: 94-75-7, informe: *Teniendo en cuenta las posibles concentraciones con las que se presenta el producto: **¿**Cuál es la diferencia en cuanto a toxicidad en humanos, cuando el producto contiene 40%, 60% y 80% de

ácido 2,4 dicloro fenoxiacético en su formulación? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto directo a 0 metros de distancia de una vivienda familiar? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto repetitivo y cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas durante varios meses) con este agroquímico? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana de la exposición a los agroquímicos enunciados si son aplicados en forma combinada y repetida a lo largo del tiempo? (...).Se hace constar que el presente es una reiteración del oficio librado en fecha 27/09/23 .-MER.-**FDO. DRA. LUCIANA ELEAS. JUEZA.**-FC.

SALUDO A UD. ATTE.

Art. 411.- PLAZO PARA LA CONTESTACIÓN. RETARDO. Los informes deberán ser evacuados dentro del término de diez (10) días de haber sido recibidos o del menor plazo que fije el tribunal, bajo apercibimiento de las sanciones que el tribunal considere, no admitiéndose, cuando se tratara de oficinas públicas, la exigencia previa de requisitos o cumplimiento de recaudos de ninguna naturaleza.

La falta de presentación dentro del plazo fijado hace responsable de los daños causados a la persona encargada de evacuarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder por desobediencia a una orden judicial y la aplicación de sanciones conminatorias.-

Art. 137.- SANCIONES CONMINATORIAS. Tendrán facultades para exigir el cumplimiento de las providencias, ordenes y sentencias que expidan en el ejercicio de su función, para lo cual la autoridad competente estará obligada a asistirlos con la fuerza pública, si ella fuera necesaria.

Podrán también aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes o los terceros cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Se graduarán conforme al monto del juicio y caudal económico de quien debe satisfacerlas, como de las demás circunstancias de autos, referentes al grado de su desobediencia, rebeldía o resistencia, y se efectuarán previa intimación, bajo apercibimiento expreso, por un (1) día, sin perjuicio de que sean dejadas sin efecto o se reajusten si el obligado desiste de su postura y justifica total o parcialmente su proceder.

OFICIO DEPOSITADO EN CASILLERO DIGITAL: 27240569219

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=ROBLES Maria Emilse, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27289198933, Fecha:23/10/2023;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
CENTRO JUDICIAL MONTEROS
Juzgado en lo Civil y Comercial Común I

ACTUACIONES N°: 149/23



H3020162319

**AUTOS: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS
c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO. EXPTE. N°149/23.-**

Monteros, 23 de octubre de 2023.

**Proveyendo presentación de fecha 23/10/2023 realizada por el Dr.
Martinez Folquer Eduardo S.:**

Agréguese y ténganse presentes los recaudos legales acompañados y
por cumplido apartado V)- 2- del proveido de fecha 18/10/2023.- MER **FDO. DRA.
LUCIANA ELEAS. JUEZA.-**

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=ELEAS Luciana, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27311282366, Fecha:23/10/2023;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>

ACOMPAÑAMOS OFICIO DILIGENCIADO

**JUICIO: "SESTO CABRAL MARÍA EUGENIA Y GONZÁLEZ EXEQUIEL ELÍAS c/ SOTILLO
SILVIO CARLOS Y OTROS s/ AMPARO AMBIENTAL" Expte. N° 149/23**

Señora Jueza Civil y Comercial Común


**María Eugenia Sesto Cabral y Exequiel Elías González, parte actora en autos,
con el patrocinio letrado de Adriana García Romano, a V.S. respetuosamente decimos:**


I. Acompañamos el oficio dirigido a la Dirección de Agricultura de la Provincia de Tucumán depositado en el casillero virtual de nuestra patrocinante el día de la fecha (23-10-2023) debidamente diligenciado.

II. Solicitamos que se agregue y se tenga presente.

Proveer de conformidad es

JUSTICIA


Exequiel Elías
González
34160155


María Eugenia
Sesto Cabral
26685498



Expediente: 149/23

Carátula: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS C/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. S/ AMPARO

Unidad Judicial: JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN I

Tipo Actuación: OFICIO CASILLERO VIRTUAL CON FIRMA DIGITAL

Fecha Depósito: 23/10/2023 - 04:38

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

27240569219 - SESTO CABRAL, MARIA EUGENIA-ACTOR/A

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN**CENTRO JUDICIAL MONTEROS**

Juzgado en lo Civil y Comercial Común I

ACTUACIONES N°: 149/23



H3020162087



Monteros, 19 de octubre de 2023.

AL SR. DIRECTOR**DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DE TUCUMÁN.****S / D****JUICIO: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO - EXPTE. N°: 149/23.**

En los autos del rubro que se tramitan por ante éste Juzgado en lo Civil y Comercial Común, Centro Judicial Monteros, a cargo de la Dra. Luciana Eleas, Secretaría a cargo de la Dra. María Rocío Guerra, se ha dispuesto dirigir el presente a fin de que tome razón y dé cumplimiento con el proveído, que en su parte pertinente, a continuación se transcribe: "Monteros, 18 de octubre de 2023. I)-(...)-II)-(...)-III)-(...)-IV)- **Librese oficio** a la Dirección de Agricultura de Tucumán a fin de que informe si se encuentra en vigencia la Resolución 278/2019 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos (SAAYA).-FDO. DRA. LUCIANA ELEAS - JUEZA.-JMC.

SALUDO A UD. ATTE.

Art. 411.- PLAZO PARA LA CONTESTACIÓN. RETARDO. Los informes deberán ser evacuados dentro del término de diez (10) días de haber sido recibidos o del menor plazo que fije el tribunal, bajo apercibimiento de las sanciones que el tribunal considere, no admitiéndose, cuando se tratara de oficinas públicas, la exigencia previa de requisitos o cumplimiento de recaudos de ninguna naturaleza.

La falta de presentación dentro del plazo fijado hace responsable de los daños causados a la persona encargada de evacuarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder por desobediencia a una orden judicial y la aplicación de sanciones conminatorias.-

Art. 137.- SANCIONES CONMINATORIAS. Tendrán facultades para exigir el cumplimiento de las providencias, ordenes y sentencias que expidan en el ejercicio de su función, para lo cual la autoridad competente estará obligada a asistirlos con la fuerza pública, si ella fuera necesaria.

Podrán también aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes o los terceros cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Se graduarán conforme al monto del juicio y caudal económico de quien debe satisfacerlas, como de las demás circunstancias de autos, referentes al grado de su desobediencia, rebeldía o resistencia, y se efectuarán previa

intimación, bajo apercibimiento expreso, por un (1) día, sin perjuicio de que sean dejadas sin efecto o se reajusten si el obligado desista de su postura y justifica total o parcialmente su proceder.

OFICIO DEPOSITADO EN CASILLERO DIGITAL: 27240569219

Actuación firmada en fecha 20/10/2023

Certificado digital

CN=ROBLES Mana Emile, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27289198933

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.



Pido se ordene proceso. Se apliquen normas procesales del CPC

Señora Juez en lo Civil y Comercial Común - Centro Judicial Monteros.

Juicio: Sesto Cabral Maria Eugenia y Gonzalez Exequiel Elias c/ Sotillo Silvio Carlos y ot. s/ Amparo. Expte. 149/23

Eduardo Sixto Martinez Folquer, por los demandados Bioenergía Santa Rosa SA y Temas Industriales SA, a V.S. digo:

I.- Se tramite este proceso conforme normas del CPC.

Advierte esta parte que se ha librado un nuevo oficio a la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UNT. Se requiere mediante dicho oficio que esa cátedra realice una serie de informes a V.S. más vinculados con un trabajo pericial que con un simple oficio.

Más allá del nulo valor probatorio de consideraciones generales como las que se requiere en ese oficio -y la ajenidad de esta parte a las supuestas aplicaciones- **pido a V.S. que la producción de prueba sea resuelta conforme las normas que regulan a estos especiales procesos.**

Asimismo, se advierte una serie de medios probatorios en trámite.

Ante ello, habiéndose contestado la demanda de amparo por los accionados, pido que:

a) O bien se requiera a SENASA y la ANMAT que evacuen informes en los términos del art. 21 del CPC (atento a que la actora controvierte todo el funcionamiento de estos organismos. (Tal como se ha solicitado la contestar demanda)

b) O de lo contrario, si VS. rechazara ese pedido, se disponga la apertura a pruebas, si lo considerara conveniente, y los oficios y pruebas ofrecidas por cada parte se produzcan dentro del ese plazo probatorio previsto por el art. 60 del CPC.-

De lo contrario, si V.S. no ajustara el devenir de este proceso a lo regulado por la legislación procesal constitucional, además de tornar todo el accionar nulo, el proceso se prolongará indefinidamente.

II.- Petitorio.

Por lo expuesto a VS. pido:

1. Disponga el orden de este proceso conforme las pautas del Código Procesal Constitucional.

2. Disponga la intervención del SENASA y de ANMAT a los fines de que contesten el informe del art. 21 del CPCC (Contestación de demanda del amparo), tal como esta parte lo ha solicitado.

3. En caso contrario disponga la apertura a pruebas y la producción de la misma en los términos de la norma adjetiva, evitándose una prolongación de este trámite no prevista por el legislador procesal.

Proveer de conformidad,

Será Justicia



RESPUESTA OFICIO JUDICIAL

Sr. JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL

I NOMINACIÓN

CENTRO JUDICIAL MONTEROS

JUICIO: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS c/

SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO

EXPTE. JUD. N°: 149/23

Dra. María del Milagro Marteau, en mi carácter de Directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Productivo, me presento ante V.S y digo:

1- Por la presente vengo a responder el oficio digital N° H3020160989 remitido a la Dirección de Agricultura, hoy dependiente de la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo.

2- Acompaño informe brindado por la citada Dirección a fin de dar cumplimiento con lo requerido.

Atentamente.-



TUCUMÁN, 23 de octubre de 2023

Sra Jueza Civil y Comercial Común

DRA. LUCIANA ELEAS

Centro Judicial Monteros

Su Despacho

REF. Expte. N° 1669/330/J-2023

Gustavo Páez Márquez, en mi carácter de Director de Agricultura de la provincia de Tucumán y autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Agroquímicos N° 6.291 tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo del OFICIO JUDICIAL N° H3020160989 remitido en el juicio caratulado "SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS c/ SOTILIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO - EXPTE. N° 149/23".

Conforme se nos solicita informar sobre las restricciones vigentes en la provincia referidas a las distancias mínimas a respetar para la aplicación de pesticidas, con respecto a linderos, a condiciones meteorológicas, y cualquier otra tendiente a proteger la salud y el medio ambiente frente a este tipo de aplicaciones, cumplimos en informar que la cuestión en análisis se encuentra regulada por el artículo 7°, apartado "Del Uso", del Decreto Reglamentario N° 299/3 (S.A), reglamentario de la Ley Provincial de Agroquímicos N° 6.291.

ARTÍCULO 7° "Del uso": a) En los tratamientos fitosanitarios deberán tomarse en consideración la dirección y velocidad del viento a efectos de que se haga posible y efectiva la aplicación, como así también la proximidad de otros cultivos y animales, para los cuales entraña peligro la sustancia aplicada. b) Cuando se utilicen equipos aéreos se establecen las siguientes recomendaciones: b.1.) No efectuar aplicaciones de productos herbicidas plaguicidas, cuando la velocidad del viento exceda los quince (15) km/h. b.2.) Operar a una distancia mayor de dos mil (2000) metros de los centros poblados, no pudiendo sobrevolarlos aun después de haber agotado su carga. Considérese centros poblados a las comunidades conocidas como municipios o que cuenten con autoridad comunal, aunque sea a nivel de comisión vecinal. c) Queda restringido el empleo de agroquímicos que representen riesgo de daño por deriva o



volatilidad a los cultivos, vecinos, cubiertas vegetales de protección eólica e hídrica, flora silvestre u ornamental, actividades de ganadería y granja, fauna y la contaminación de curso de agua, abrevaderos naturales de ganado, embalses, viviendas, etc.

Conforme las regulaciones provinciales en la materia, no existen distancias mínimas para las aplicaciones terrestres de agroquímicos sólo existen recomendaciones referidas a buenas prácticas agrícolas.

Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.




Ing. Agr. GUSTAVO EDUARDO PAEZ
DIRECTOR DE AGRICULTURA
SECRETARÍA DE ESTADO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO



RESPUESTA OFICIO JUDICIAL

Sr. JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL

I NOMINACIÓN

CENTRO JUDICIAL MONTEROS

JUICIO: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS c/

SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO

EXPTE. JUD. N°: 149/23

Dra. María del Milagro Marteau, en mi carácter de Directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Productivo, me presento ante V.S y digo:

1- Por la presente vengo a responder el oficio digital N° H3020162087 remitido el 19/10/2023 a la Dirección de Agricultura, hoy dependiente de la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo.

2- Acompaño informe brindado por la citada Dirección a fin de dar cumplimiento con lo requerido.

Atentamente.-



TUCUMÁN, 24 de octubre de 2023

Sra Jueza Civil y Comercial Común
DRA. LUCIANA ELEAS
Centro Judicial Monteros
Su Despacho


REF. Expte N° 1740/330-J-2023

Gustavo Páez Márquez, en mi carácter de Director de Agricultura de la provincia de Tucumán y autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Agroquímicos N° 6.291 tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo del OFICIO JUDICIAL N° H3020162087 remitido en el juicio caratulado "SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS c/ SOTILIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO - EXPTE. N° 149/23".

Cumplimos en informar que la Resolución N° 278/2019 (SAAyA) de la Secretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos se encuentra vigente. Acompañamos a la presente copia certificada.

Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.




Ing. Agr. GUSTAVO EDUARDO PÁEZ
DIRECTOR DE AGRICULTURA
SECRETARÍA DE ESTADO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO



Sub-Secretaría de Asuntos
Agrarios y Alimentos
Tucumán



SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 15 OCT. 2019

RESOLUCIÓN N° 278 (SAAyA)
EXPEDIENTE N° 1857/330-D-2019

VISTO lo normado por la Ley provincial de Uso de Agroquímicos N° 6.291/91, su respectivo Decreto Reglamentario N° 299/3 -96 y las Resoluciones N° 619/5 (S.A. y G.) - 2001, N° 291 (SAAyA) de fecha 12/06/17 y N° 466/2019 (SENASA); y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución 291/2017 (SAAyA) es genérica en su prohibición según el tipo de formulación del 24D ácido diclorofenoxiacético;

Que las formulaciones volátiles de los herbicidas 2,4D ácido diclorofenoxiacéticos (éster butílico e isobutílico) y 2,4DB ácido diclorofenoxibutírico (éster butílico e isobutílico), podrían causar daños a diferentes cultivos agrícolas y forestales por lo que resulta necesario extremar las medidas para evitar su comercialización y uso;

Que como consecuencia del clima subtropical -monzónico- continental de la provincia, se producen efectos de altas temperaturas sobre la tensión de vapor durante las aplicaciones que provoca daños en cultivos susceptibles, vegetación arbórea y ornamental que forma parte del paisaje rural tucumano que se debe preservar;

Que no puede garantizarse la ausencia de daños por volatilidad y/o deriva, por cuanto la vegetación susceptible convive con cultivos en los cuales se utilizan herbicidas de acción hormonal, coincidiendo temporalmente con su ciclo de crecimiento, generando baja de rendimientos y pérdidas, como así también, daños a personas y al medio ambiente;

Que desde el año 1994 hasta la fecha, la Dirección de Agricultura constató daños por estos herbicidas en diferentes especies vegetales;

Que en la actualidad existen nuevas formulaciones del ácido 2,4D diclorofenoxiacético que presentan una volatilidad potencial menor, disminuyendo así, el riesgo de deriva extrema al lote tratado;

BBB
Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos
Tucumán

SAAyA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Eduardo Paez
Ing. Agr. EDUARDO PAEZ
DIRECTOR DE AGRICULTURA
SECRETARÍA DE ESTADO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO



*Sub-Secretaría de Asuntos
Agrarios y Alimentos
Tucumán*



III...2 Continúa Resolución N° 278 /SAAyA 15 OCT 2019
Expediente N° 1857/330-D-2019

Que mediante Acta de la Comisión Fitosanitaria Provincial (CFP) se sugiere al organismo fiscalizador que incorpore a la prohibición existente todo formulado del 2,4-D que contenga éster butílico e isobutílico;

Que la Resolución N° 466/2019 (SENASA) establece prohibiciones y plazos que deben ser tenidos en cuenta;

Por ello, y en uso de las facultades que confiere el artículo 4° y concordantes de la Ley provincial de Uso de Agroquímicos N° 6.291/91 y su Decreto Reglamentario N° 299/3-96;

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución N° 291/2017(SAAyA) de fecha 12/06/17, en virtud de lo expuesto precedentemente.

ARTÍCULO 2°.- Prohibir la venta y aplicación con diferentes equipos dispensores, aéreos o terrestres en todo el territorio de la provincia de los herbicidas: 2,4D diclorofenoxiacético (éster butílico e isobutílico) y 2,4DB diclorofenoxibutírico (éster butílico e isobutílico).

ARTÍCULO 3°.- Prohibir la elaboración y fraccionamiento de los herbicidas 2,4D diclorofenoxiacético (éster butílico e isobutílico) a partir de los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos de la entrada en vigencia de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Prohibir la importación de los herbicidas 2,4D diclorofenoxiacético (éster butílico e isobutílico) a partir de los CIENTO VEINTE (120) días corridos de la entrada en vigencia de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5°.- Restringir el uso de 2,4D sal amina, únicamente a aplicaciones terrestres, extendiendo su venta bajo receta agronómica conforme al artículo 7° del Decreto Reglamentario 299/3 (SA)/96.

ARTÍCULO 6°.- Las personas humanas y jurídicas contempladas en el artículo 5° de Decreto Reglamentario 299/3 (SA)-96 de la Ley de Uso de Agroquímicos N° 6291/91 deberán informar al organismo de aplicación, mediante declaración jurada: el ingreso al depósito de la firma, nombre comercial, tipo de formulación, número de inscripción ante el SENASA, cantidad (litros o kilogramos) y

[Firma manuscrita]
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
SECRETARÍA DE ESTADO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO

SAyA

ES COPIA DEL ORIGINAL

[Firma manuscrita]
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
SECRETARÍA DE ESTADO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO



*Sub-Secretaría de Asuntos
Agrarios y Alimentos
Tucumán*



III...3 Continúa Resolución N° 278 (SAyA) 15 OCT. 2019
Expediente N° 1857/330-D-2019

presentación (tipo de envase y su volumen) del producto 2.4D, en todas sus formulaciones.

ARTÍCULO 7°.- Las personas humanas y jurídicas contempladas en el artículo 5° de Decreto Reglamentario 299/3 (SA)-96 de la Ley de Uso de Agroquímicos N° 6291/91, que tienen obligación de llevar el Libro de Registro de Ingreso y Expendio de Productos, además de todo lo que corresponde por exigencia de las normas citadas, deberán asentar en aquel: los productos fitosanitarios cuya venta y aplicación se encuentren prohibidos en el territorio provincial y en condición de tránsito con la leyenda aclaratoria de "Mercadería en Tránsito" hasta el vencimiento de los plazos citados en los artículos 3 y 4 de la presente Resolución.

ARTÍCULO 8°.- En el caso de las formulaciones con prohibición de uso en el territorio provincial, pero que se encuentran "en tránsito", deberán mantener durante la permanencia del producto en los depósitos: un cartel identificatorio visible a simple vista; y en cada pallets, la leyenda de "Mercadería en Tránsito" y la fecha de ingreso al depósito.

ARTÍCULO 9°.- Las personas humanas y jurídicas contempladas en el artículo 5° del citado Decreto Reglamentario de la Ley de Uso de Agroquímicos N° 6291/91 de Agroquímicos, deberán informar al organismo de aplicación con 48 horas de anticipación y de manera fehaciente: el movimiento de la "Mercadería en Tránsito" a otros destinos, fuera del territorio provincial.

ARTÍCULO 10°.- Las personas humanas o jurídicas contempladas en el artículo 7 de la presente resolución, deberán exhibir ante el requerimiento de los Inspectores de Sanidad Vegetal la documentación respaldatoria del movimiento de la mercadería.

ARTÍCULO 11°.- Las formulaciones de 2.4 D que no se enmarquen en la presente resolución, para ser considerada la factibilidad de su venta y uso en el territorio provincial, deberán solicitar mediante expediente al organismo de aplicación la definición de cada caso, quien resolverá lo que corresponda con el asesoramiento de la Comisión Fitosanitaria Provincial (C.F.P.).

[Firma]
SECRETARÍA DE ESTADO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO

DATA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Firma]
Ing. Agr. GUSTAVO EDUARDO PAEZ
DIRECTOR DE AGRICULTURA
SECRETARÍA DE ESTADO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO



*Sub-Secretaría de Asuntos
Agrarios y Alimentos
Tucumán*



III...4 Continúa Resolución N° 278
Expediente N° 1857/330-D-2019

(SAAyA) 13 OCT. 2019

De ser necesario, el organismo de aplicación solicitará sus ensayos correspondientes ante los organismos oficiales y certificados por Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), dentro del territorio provincial, según los artículos 11° de la Ley de Uso de Agroquímicos N° 6.291 y 10° del Decreto Reglamentario N° 299/3 (SA).

ARTICULO 12°.- Las empresas que formulen, fabriquen o fraccionen los productos mencionados en el artículo 11, deberán realizar en conjunto con el organismo de aplicación, capacitaciones de manejo y uso, según las características propias de dichas formulaciones para lograr el menor impacto ambiental posible. Las capacitaciones serán teórico/práctico y las empresas deberán proporcionar el material de divulgación que complemente y oriente de forma clara y precisa, el mejor conocimiento y uso del herbicida.

ARTICULO 13°.- Los infractores a las disposiciones de la presente resolución se harán pasibles de las sanciones previstas en la Ley de Uso de Agroquímicos N° 6.291 y su Decreto Reglamentario 299/3 (SA). La mercadería que se encuentre en el territorio provincial será intervenida, separada y comunicada al SENASA para su decomiso una vez vencidos los plazos mencionados en los artículos 2 y 3 de la Resolución N° 466/2019 (SENASA).

ARTICULO 14°.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, y pasar a la Dirección de Agricultura para su intervención y archivo.

Ing. Agr. GUILLERMO CERRA
Subsecretario
Ministerio de Agricultura y Ganadería

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Agr. GUSTAVO EDUARDO PAEZ
DIRECTOR DE AGRICULTURA
SECRETARÍA DE ESTADO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO

SOLICITAMOS SE AGREGUE PUNTO DE INFORME – PEDIMOS OFICIO

JUICIO: “SESTO CABRAL MARÍA EUGENIA Y GONZÁLEZ EXEQUIEL ELÍAS c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OTROS s/ AMPARO AMBIENTAL” Expte. N° 149/23

Señora Jueza Civil y Comercial Común

María Eugenia Sesto Cabral y Exequiel Elías González, amparistas en autos, con el patrocinio letrado de **Adriana García Romano**, a V.S. respetuosamente decimos:

I. Como surge de las constancias de autos por decreto de fecha 18-10-2023 (VII), notificado el viernes 20-10-2023, a pedido de la parte demandada se ha dispuesto oficiar al SENASA y nuevamente a la Dirección de Agricultura de la Provincia de Tucumán (todavía está pendiente de contestación la rogatoria ordenada el 4-10-2023, y diligenciada el 9 de octubre).

Al cuestionario dispuesto el 25-9-2023 para la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, y que ahora deben responder los mentados organismos, se añadió, entre otros, el siguiente punto: *“k) Si existe una clasificación de bandas toxicológicas y cuáles son los productos que pueden aplicarse en las distintas bandas.”*

Solicitamos que, a fin de completar y precisar ese punto objeto de informe, se agregue como subpunto o por separado, el que se consigna a continuación: ***Cuál es el parámetro seguido por SENASA para la clasificación de las bandas toxicológicas.***

II. Asimismo y teniendo en cuenta que hemos invocado afectaciones concretas a la salud como consecuencia de las 14 fumigaciones con agroquímicos denunciadas -la última acaecida el pasado jueves 21-9-2023- y llevadas a cabo en violación de la ley 6.291 y su reglamentación, pedimos que, como complemento del informe a despachar por la Facultad de Medicina (cátedra de Toxicología) de la UNT, por la plena incumbencia para responder acerca de los impactos de los plaguicidas en la salud humana, se oficie también al **Laboratorio GeMA - Genética y Mutagénesis Ambiental** del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), coordinado por la Doctora Delia Aiassa, correo electrónico oficial daiassa@exa.unrc.edu.ar, dirección a la que requerimos sea remitida la rogatoria, labrándose por Secretaría el acta respectiva (art. 195 del CPC y C).

Ponemos de resalto que dicho laboratorio de la UNRC, con domicilio en Ruta Nac. 36 - KM. 601, Río Cuarto, Córdoba, desde el año 2006 investiga los efectos biológicos de contaminantes ambientales sobre los organismos, con especial atención al efecto sobre el material genético de animales y vegetales (genotoxicología), y realiza el monitoreo genotoxicológico de poblaciones humanas expuestas a plaguicidas y arsénico; estudios de genotoxicidad in vitro en células humanas expuestas a plaguicidas; y estudios de la evolución de enfermedades ambientales en registros públicos de las localidades donde se monitorean las poblaciones humanas¹; razón por la cual resulta de suma importancia contar con el aporte científico a título informativo proveniente de la universidad pública en esta instancia, dado los derechos fundamentales en juego a vivir en un ambiente sano, a la vida, a la salud y a la integridad personal que están siendo seriamente menoscabados.

Los puntos de informe que requerimos sean evacuados, son los que V.S. indicó para la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UNT, a saber:

a) ¿Cuáles son las distancias recomendadas para la fumigación terrestre con agroquímicos sin que esas sustancias representen peligro de daño para la salud humana a corto, mediano y largo plazo?

b) ¿Cuáles son las posibles consecuencias para la salud humana a corto, mediano y largo plazo, cuando esas distancias de aplicación de agroquímicos no son cumplidas?

c) Respecto de los agroquímicos glifosato (análogo de la glicina, N° de CAS:1071-83-6); herbicida Starane (1-metilheptil éster del ácido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético en equivalentes de ácido fluroxypyr) y MSMA (metil arsenato monosódico, herbicida órgano arsenado N° de CAS 2163-80-6), informe en cada caso:

* ¿Cuál es el riesgo para la salud humana en caso de contacto directo a 0 metros?

* ¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas?

1

Entre muchas otras referencias, la trayectoria del Laboratorio GEMA y su línea de investigación, surge de la nota de fecha 9-2-2022 de la Dirección de Prensa y Difusión de la Universidad Nacional de Río Cuarto: https://www.unrc.edu.ar/inc/n_completa.php?nota=36482.

* ¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto repetitivo y cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas por varios meses) con ese agroquímico?

d) Respecto al agroquímico 2,4D, ácido 2,4 dicloro fenoxiacético, herbicida hormonal auxínico, N° de CAS: 94-75-7, informe:

*Teniendo en cuenta las posibles concentraciones con las que se presenta el producto: ¿Cuál es la diferencia en cuanto a toxicidad en humanos, cuando el producto contiene 40%, 60% y 80% de ácido 2,4 dicloro fenoxiacético en su formulación?

*¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto directo a 0 metros de distancia de una vivienda familiar?

*¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas?

*¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto repetitivo y cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas durante varios meses) con este agroquímico?

*¿Cuál es el riesgo para la salud humana de la exposición a los agroquímicos enunciados si son aplicados en forma combinada y repetida a lo largo del tiempo?.

III. Nuestro pedimento encuentra basamento jurídico en las previsiones del 21 de la ley 6.944 pero muy especialmente por el tipo de proceso en trámite, del artículo 32 de la ley 25.675, segundo párrafo, que reza:

“... En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte.”

Glosando la norma transcripta, la doctrina ha destacado la amplitud de facultades con las que cuenta el juez interviniente para disponer **todas las medidas necesarias** tendientes a **ordenar, conducir o probar los hechos dañosos** en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general (CAFFERATTA Néstor, “Introducción al derecho ambiental”, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Editorial del Deporte Mexicano, 2004, México, pág. 121 y ss; SBDAR Claudia B., “Los principios ambientales en la

base de las decisiones judiciales", publicado en La Ley 9/2/2023, 1 La Ley 2023-A).

Proveer de conformidad es

JUSTICIA



Excmo. Elia
González
34160155



H. Excmo.
Justo Obando
26685498

ACOMPANAMOS OFICIO DILIGENCIADO

**JUICIO: "SESTO CABRAL MARÍA EUGENIA Y GONZÁLEZ EXEQUIEL ELÍAS c/ SOTILLO
SILVIO CARLOS Y OTROS s/ AMPARO AMBIENTAL" Expte. N° 149/23**

Señora Jueza Civil y Comercial Común

María Eugenia Sesto Cabral y Exequiel Elías González, parte actora en autos,
con el patrocinio letrado de **Adriana García Romano**, a V.S. respetuosamente decimos:

I. Acompañamos el oficio que reitera el despachado el 27-9-2023 dirigido a la
Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UNT, debidamente diligenciado.

II. Solicitamos que se agregue y se tenga presente.

Proveer de conformidad es

JUSTICIA


Exequiel Elías
González
34160155


María Eugenia
Sesto Cabral
26685498



Expediente 149/23

Carátula. **SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS C/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. S/ AMPARO**Unidad Judicial: **JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN I**Tipo Actuación: **OFICIO CASILLERO VIRTUAL CON FIRMA DIGITAL**Fecha Depósito: **24/10/2023 - 04:39**Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:
27240569219 - GONZALEZ, EXEQUIEL ELIAS-ACTOR/A**PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN****CENTRO JUDICIAL MONTEROS****Juzgado en lo Civil y Comercial Común I**

ACTUACIONES N° 149/23



H3829162278

Monteros, 23 de octubre de 2023,

URGENTE**A LAS AUTORIDADES****DE LA CÁTEDRA DE TOXICOLOGIA****FACULTAD DE MEDICINA DE LA U.N.T****S/D****JUICIO: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO - EXPTE. N°: 149/23.**

En los autos del rubro que se tramitan por ante éste Juzgado en lo Civil y Comercial Común, Centro Judicial Monteros, a cargo de la Dra. Luciana Eleas, Secretaría a cargo de la Dra. María Rocio Guerra, se ha dispuesto dirigir el presente a fin de que tenga bien dar cumplimiento con lo ordenado en providencia de fecha 25/10/2023 que en su parte pertinente a continuación se transcribe: "Monteros, 25 de septiembre de 2023. (...)3- Los actores requieren también informe a **Facultad de Medicina Cátedra de Toxicología**(...). En efecto, quedarán redactadas en los siguientes términos: ¿Cuáles son las distancias recomendadas para la fumigación terrestre con agroquímicos sin que esas sustancias representen peligro de daño para la salud humana a corto, mediano y largo plazo? b) ¿Cuáles son las posibles consecuencias para la salud humana a corto, mediano y largo plazo, cuando esas distancias de aplicación de agroquímicos no son cumplidas?. c) Respecto de los agroquímicos glifosato (análogo de la glicina, N° de CAS:1071-83-6); herbicida Starane (1-metilheptil éster del ácido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético en equivalentes de ácido fluroxypyr) y MSMA (metil arsenato monosódico, herbicida órgano arsenado N° de CAS 2163-80-6), informe en cada caso: * ¿Cuál es el riesgo para la salud humana en caso de contacto directo a 0 metros? * ¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas? * ¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto repetitivo y cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas por varios meses) con ese agroquímico?d) Respecto al agroquímico 2,4D, ácido 2,4 dicloro fenoxiacético, herbicida hormonal auxínico, N° de CAS: 94-75-7, informe: "Teniendo en cuenta las posibles concentraciones con las que se presenta el producto: ¿Cuál es la diferencia en cuanto a toxicidad en humanos, cuando el producto contiene 40%, 60% y 80% de ácido 2,4 dicloro fenoxiacético en su formulación? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto directo a 0 metros de distancia de una vivienda familiar? *¿Cuál es el riesgo para

la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto repetitivo y cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas durante varios meses) con este agroquímico? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana de la exposición a los agroquímicos enunciados si son aplicados en forma combinada y repetida a lo largo del tiempo? (...). Se hace constar que el presente es una reiteración del oficio librado en fecha 27/09/23.-MEN FDO. DRA. LUCIANA ELEAS. JUEZA.-FC.

SALUDO A UD. ATTE.

Art. 411.- PLAZO PARA LA CONTESTACIÓN, RETARDO. Los informes deberán ser evacuados dentro del término de diez (10) días de haber sido recibidos o del menor plazo que fije el tribunal, bajo apercibimiento de las sanciones que el tribunal considere, no admitiéndose, cuando se tratare de oficinas públicas, la exigencia previa de requisitos o cumplimiento de recaudos de ninguna naturaleza.

La falta de presentación dentro del plazo fijado hace responsable de los daños causados a la persona encargada de evacuarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder por desobediencia a una orden judicial y la aplicación de sanciones conminatorias.

Art. 137.- SANCIONES CONMINATORIAS. Tendrán facultades para exigir el cumplimiento de las providencias, ordenes y sentencias que expidan en el ejercicio de su función, para lo cual la autoridad competente estará obligada a asistirlos con la fuerza pública, si ella fuera necesaria.

Podrán también aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes o los terceros cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Se graduarán conforme al monto del juicio y caudal económico de quien debe satisfacerlas, como de las demás circunstancias de autos, referentes al grado de su desobediencia, rebeldía o resistencia, y se efectuarán previa intimación, bajo apercibimiento expreso, por un (1) día, sin perjuicio de que sean dejadas sin efecto o se reajusten si el obligado desiste de su postura y justifica total o parcialmente su proceder.

OFICIO DEPOSITADO EN CASILLERO DIGITAL: 27240569219

Actuación firmada en fecha 23/10/2023

Certificado digital.
CN=ROBLES Mana Emise, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27289198933

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.

EXP-DGME-3146/2023



Pido reconsidere medidas

SEÑORA JUEZ CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA IA NOMINACIÓN.
CENTRO JUDICIAL MONTEROS.-

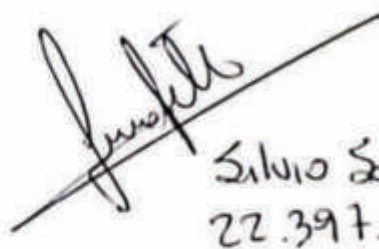
EXPEDIENTE: 149/23 SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ
EXEQUIEL ELIAS C/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. S/ AMPARO

Silvio Sotillo, citado en autos a producir informe del art 21 procesal, a VS
respetuosamente digo:

Que en autos se han ordenado una serie de medidas que no concuerdan con el proceso
propuesto, atendiendo a consecutivos e inoportunos, estrictamente, pedidos de los actores,
alterando la estricta regla que determina el Código Procesal Constitucional sobre
ofrecimiento y producción de pruebas. Las nuevas, distintas y diversas, medidas no
apuntan a probar hecho alguno sino cuestiones generales y teóricas ajenas al objeto de
este y todo juicio. Claramente se perjudica nuevamente el derecho de defensa y la
igualdad en el proceso, en desmedro de mi parte y se deforma o altera su estructura en
beneficio de los amparistas.

Pido reconsidere los trámites despachados luego de evacuado el informe del art 21 de rito
y su petitorio y los deje sin efecto, o no se tenga en cuenta ninguna otra averiguación
posterior al informe de mi parte y la prueba ofrecida oportunamente y con ello ponga
orden a este proceso.

JUSTICIA



Silvio Sotillo
22.397.031

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL MONTEROS
Juzgado en lo Civil y Comercial Común I



ACTUACIONES N°: 149/23



H3020160207

Monteros, 27 de septiembre de 2023.

**A LA CÁTEDRA DE TOXICOLOGIA
DE LA FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNT**


S / D

**JUICIO: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS
c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO - EXPTE. N°: 149/23.**

En los autos del rubro que se tramitan por ante éste Juzgado en lo Civil y Comercial Común, Centro Judicial Monteros, a cargo de la Dra. Luciana Eleas, Secretaria a cargo de la Dra. María Rocío Guerra, se ha dispuesto dirigir el presente a fin de que tenga bien informar a este Juzgado y Secretaria: "Monteros, 25 de septiembre de 2023. (...) 3- Los actores requieren también informe a **Facultad de Medicina Cátedra de Toxicología** (...). En efecto, quedarán redactadas en los siguientes términos: **a) ¿Cuáles son las distancias recomendadas para la fumigación terrestre con agroquímicos sin que esas sustancias representen peligro de daño para la salud humana a corto, mediano y largo plazo?** **b) ¿Cuáles son las posibles consecuencias para la salud humana a corto, mediano y largo plazo, cuando esas distancias de aplicación de agroquímicos no son cumplidas?** **c) Respecto de los agroquímicos glifosato (análogo de la glicina, N° de CAS:1071-83-6); herbicida Starane (1-metilheptil éster del ácido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético en equivalentes de ácido fluroxypyr) y MSMA (metil arsenato monosodico, herbicida órgano arsenado N° de CAS 2163-80-6), informe en cada caso: * ¿Cuál es el riesgo para la salud humana en caso de contacto directo a 0 metros? * ¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas? * ¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto repetitivo y cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas por varios meses) con ese agroquímico?** **d) Respecto al agroquímico 2,4D, ácido 2,4 dicloro fenoxiacético, herbicida hormonal auxínico, N° de CAS: 94-75-7, informe: *Teniendo en cuenta las posibles concentraciones con las que se presenta el producto: ¿Cuál es la diferencia en cuanto a toxicidad en humanos, cuando el producto contiene 40%, 60% y 80% de ácido 2,4 dicloro fenoxiacético en su formulación? *¿Cuál es el riesgo para la**

salud humana debido al contacto directo a 0 metros de distancia de una vivienda familiar? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto repetitivo y cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas durante varios meses) con este agroquímico? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana de la exposición a los agroquímicos enunciados si son aplicados en forma combinada y repetida a lo largo del tiempo? (...). -MER FDO. DRA. LUCIANA ELEAS. JUEZA.- FDO. DRA. LUCIANA ELEAS.- JUEZA.-FC.

SALUDO A UD. ATTE.


Dra. MARIA ROCIO GUERRA
SECRETARIA JUD. CAT. B
JUEZA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN
J. T. JUDICIAL MONTEROS

Art. 411.- PLAZO PARA LA CONTESTACIÓN. RETARDO. Los informes deberán ser evacuados dentro del término de diez (10) días de haber sido recibidos o del menor plazo que fije el tribunal, bajo apercibimiento de las sanciones que el tribunal considere, no admitiéndose, cuando se tratara de oficinas públicas, la exigencia previa de requisitos o cumplimiento de recaudos de ninguna naturaleza.

La falta de presentación dentro del plazo fijado hace responsable de los daños causados a la persona encargada de evacuarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder por desobediencia a una orden judicial y la aplicación de sanciones conminatorias.-

Art. 137.- SANCIONES CONMINATORIAS. Tendrán facultades para exigir el cumplimiento de las providencias, ordenes y sentencias que expidan en el ejercicio de su función, para lo cual la autoridad competente estará obligada a asistirlos con la fuerza pública, si ella fuera necesaria.

Podrán también aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes o los terceros cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Se graduarán conforme al monto del juicio y caudal económico de quien debe satisfacerlas, como de las demás circunstancias de autos, referentes al grado de su desobediencia, rebeldía o resistencia, y se efectuarán previa intimación, bajo apercibimiento expreso, por un (1) día, sin perjuicio de que sean dejadas sin efecto o se reajusten si el obligado desiste de su postura y justifica total o parcialmente su proceder.

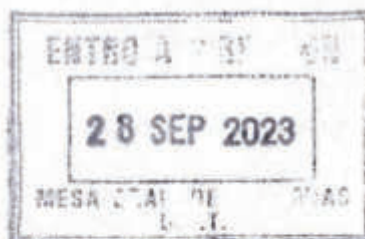
OFICIO DEPOSITADO EN CASILLERO DIGITAL: 27240569219

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=GUERRA Maria Rocio, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 23333756064, Fecha:27/09/2023;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>



Hoja de firmas

PASE A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

Hoja de firmas



Sistema: SUDOCU
Firmado por: UNT
Fecha: 29/09/2023 09:32:10
Razon: Cargado por SIU-Documentos



Sistema: SUDOCU
Firmado por: UNT
Fecha: 29/09/2023 10:37:43
Razon: Autorizado por Pedro Alfredo Fuensalida

San Miguel de Tucumán, 04/OCT/2023.-

Sr. Decano de la Facultad

de Medicina de la U.N.T.

Dr. Demetrio Mateo MARTINEZ

S_____ / _____ D

Me dirijo a usted remitiendo para su conocimiento y cumplimiento OFICIO JUDICIAL.

Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Dirección General para ser remitidas al Juzgado de origen.

Sirva de atenta nota.-

Hoja de firmas



Sistema: SUDOCU
Firmado por: UNT
Fecha: 04/10/2023 09:58:17
Razon: Cargado por SIU-Documentos



Sistema: SUDOCU
Firmado por: UNT
Fecha: 04/10/2023 09:58:25
Razon: Autorizado por Gianfranco Bevacqua Virla

San Miguel de Tucumán, 20 de octubre de 2023

Sr. Rector

Se elevan las presentes actuaciones referentes a JUICIO: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO a los fines de solicitar se remitan a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Se adjunta nota de respuesta de la Cátedra de Toxicología.

Sirva la presente de atenta nota.



San Miguel de Tucumán, 19 de octubre del 2023

Al Sr. Decano de la Facultad de Medicina
Prof. Dr. Demetrio Mateo Martínez


S _____ / _____ D

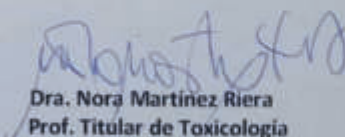
Ref. JUICIO: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS.cí SOTILLO SILVIO CARLOS
Y OT. s/ AMPARO - EXPTE. N° 149/23.

Me dirijo a Ud. con el fin de informar que la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina tiene funciones estrictamente académicas. No somos peritos oficiales y no dependemos de ningún cuerpo forense, ni cuerpo interdisciplinario que lleve a cabo pericias. Al mismo tiempo ninguno de los miembros de esta catedra se encuentra inscripto en el listado de peritos de oficios, por ende, no tenemos esas competencias.

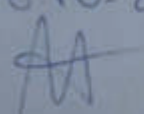
Pido que se remita estas actuaciones a quien corresponda en virtud de su competencia y organismo.

Sin otro particular, saludo a Ud. Con nuestra mayor consideración.


Dra. Gabriela Feldman
Prof. Adjunta de Toxicología
Facultad de Medicina
UNT


Dra. Nora Martínez Riera
Prof. Titular de Toxicología
Facultad de Medicina
UNT

Prof. Drs. NORA MARTÍNEZ RIERA
Prof. Titular Cat. Toxicología
FACULTAD DE MEDICINA - U.N.T

Recibido
18.10.2023


Hoja de firmas



Sistema: SUDOCU
Firmado por: UNT
Fecha: 25/10/2023 08:59:54
Razon: Cargado por SIU-Documentos



Sistema: SUDOCU
Firmado por: UNT
Fecha: 25/10/2023 09:00:47
Razon: Autorizado por Demetrio Mateo Martínez



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE TUCUMÁN

Secretaría
General
Rectorado UNT

"1.983/2.023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

DIR. GRAL. MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO.-

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN , 27 DE OCTUBRE DE 2023.-

PASE A LA DIR. GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS.-

Hoja de firmas



Sistema: SUDOCU
Firmado por: UNT
Fecha: 30/10/2023 15:11:26
Razon: Cargado por SIU-Documentos



Sistema: SUDOCU
Firmado por: UNT
Fecha: 30/10/2023 23:36:42
Razon: Autorizado por Pedro Alfredo Fuensalida

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
CENTRO JUDICIAL MONTEROS
Juzgado en lo Civil y Comercial Común I



**AUTOS: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS
c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO EXPTE N°149/23**

Monteros, 03 de noviembre de 2023.

Agréguese oficio informado por la Facultad de Medicina de la UNT -
Cátedra de Toxicología y a conocimiento de las partes. **FDO. MARIA EMILSE
ROBLES - PROSECRETARIA** (Art. 209 del C.P.C.yC.).-MER

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:
CN=ROBLES María Emilse, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27289198933, Fecha:03/11/2023;
La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>

SOLICITAMOS OFICIO URGENTEMENTE – SE APLIQUE ARTÍCULO 32 DE LA LEY 25.675

JUICIO: “SESTO CABRAL MARÍA EUGENIA Y GONZÁLEZ EXEQUIEL ELÍAS c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OTROS s/ AMPARO AMBIENTAL” Expte. N° 149/23

Señora Jueza Civil y Comercial Común

María Eugenia Sesto Cabral y Exequiel Elías González, amparistas en autos, con el patrocinio letrado de **Adriana García Romano**, a V.S. respetuosamente decimos:

I. INCONTESTACIÓN

Como emana de las constancias de autos, la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UNT, no contestó el pedido de informe requerido alegando que cumple funciones estrictamente académicas y que no realiza pericias (respuesta del 3-11-2023).

Más allá de que no se trataba de una pericia sino de una solicitud informativa a profesionales de la universidad pública que claramente tienen la experticia e incumbencia para pronunciarse sobre la materia consultada, lo relevante es que V.S. ha quedado sin ningún informe relativo a los efectos en la salud humana que ocasionan los agroquímicos, imprescindible para resolver la cautelar impetrada.

II. IMPORTANCIA SUSTANCIAL DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL RIESGO EN LA SALUD DE LOS AGROQUÍMICOS POR SU VINCULACIÓN CON LOS HECHOS INVOLUCRADOS

Ni SENASA, ni la Dirección de Agricultura de la Provincia, presidida por un ingeniero agrónomo, ni en su momento la Secretaria de Medio Ambiente y la Estación Experimental Obispo Colombres, **son organismos competentes para responder puntos vinculados al riesgo toxicológico de los plaguicidas ni demás consecuencias en la salud humana provocadas por esas sustancias**, cuestión adecuada y relevante en relación a los hechos involucrados en esta causa ambiental.

En efecto, tal como se desprende del escrito inicial hemos invocado en las 14 fumigaciones denunciadas, concretas afectaciones a la salud -detallamos en cada denuncia en sede policial los síntomas sufridos y acompañamos certificados médicos¹ que dan cuenta de

¹ Expedidos en fecha 25-4-2023 por el Dr. Andrés Torres Lanzavecchia (M.P. 7596) del CAPS de Amberes Área Operativa Monteros SIPROSA, y el 27-9-2023 por el Dr. Facundo Monteros (M.P. 10540) de la

los cuadros de intoxicación- por las sucesivas aplicaciones de herbicidas peligrosos como glifosato, 2, 4D y MSM (a base de arsénico).

En vista de ello resulta trascendental contar con información relativa al riesgo por la toxicidad de los productos aplicados, en forma previa a la resolución de la medida precautoria, y como complemento imprescindible del resto de la información requerida.

III. IMPERIOSA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 32 LGA

V.S. cuenta con amplias facultades para ordenar en esta instancia -como lo hizo- las medidas pertinentes a fin de obtener información que le permita resolver la cautelar, y una de ellas es la vinculada a las consecuencias en la salud de los plaguicidas que no ha sido respondida por la institución oficiada oportunamente.

El artículo 32 de la ley 25.675, segundo párrafo reza:

*“En **cualquier estado del proceso**, aun con carácter de medida precautoria, **podrán solicitarse medidas de urgencia**, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte.”*

Al respecto Gonzalo Sozzo² señala que **“la norma del artículo 32 es el punto axial, la fuente primaria de regulación del modelo de juez ambiental y ha sido retomado y desarrollado varias veces por los tribunales y sobre todo por la CSJN para fundamentar decisiones judiciales en las que el juez toma medidas que van más allá más allá de la ortodoxia. Esta es la regla legal de base que la CSJN utilizó para construir esta doctrina sobre el papel del juez ambiental.”**

En relación a los fallos de la Corte Federal sobre el art. 32 LGA, mencionamos a título de ejemplo, entre muchos otros, el precedente **“Saavedra, Silvia Graciela y otro c/ Administración Nacional de Parques Nacionales Estado Nacional y otros s/ amparo ambiental”** (sentencia del 25-2-2021), donde el tribunal cimero de la nación dijo:

*“... La manifiesta verosimilitud del derecho, la relevancia del bien colectivo en juego (Parque Nacional Calilegua), la urgencia en la necesidad de adoptar medidas de prevención, y **el ejercicio de las amplias facultades judiciales,***

guardia del Hospital General Lamadrid Monteros.

² “Los conflictos socio ambientales en la arena judicial en Argentina: diseños institucionales para la decisión judicial de base científica”, Bioderecho.es, Núm. 14, julio-diciembre 2021.

dispuestas en el artículo 32 de la Ley 25675, que diseña un papel del juez alejado de la figura del juez espectador, del proceso adversarial clásico, así lo justifican. Por ello: “El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. En cualquier estado del proceso, aun con carácter precautorio, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá asimismo disponerlas, sin petición de parte” (artículo 32, Ley 25.675).”

“En tal contexto, no puede desconocerse que **en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio** que, sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador (Fallos: 329:3493; 339:201).”

A mayor abundamiento la Dra. Claudia Sbdar³ enfatiza que “...la Ley General del Ambiente autoriza al juez/a "disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso a fin de proteger efectivamente el interés general" (art. 32), **evidenciando una disponibilidad del material fáctico que lo diferencia del fuero civil clásico. También lo habilita a decretar en cualquier estado del proceso medidas cautelares o medidas urgentes, oficiosamente o a pedido de parte, y aun sin audiencia de la parte contraria** (art. 32 in fine), con lo cual puede dar despacho a medidas autosatisfactivas y al inusual despacho de medidas cautelares oficiosas.”

IV. SOLICITAMOS OFICIO URGENTEMENTE

En base a lo expuesto solicitamos a V.S. que oficie al **Laboratorio GeMA - Genética y Mutagénesis Ambiental** del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), coordinado por la Doctora Delia Aiassa, correo electrónico oficial

³ “Los principios ambientales en la base de las decisiones judiciales”, La Ley 09/02/2023, 1 La Ley 2023-A.

daiassa@exa.unrc.edu.ar , dirección a la que requerimos sea remitida la rogatoria, labrándose por Secretaría el acta respectiva (art. 195 del CPC y C).

Como lo pusimos de manifiesto en presentación del 24-10-2023, dicho laboratorio de la UNRC, con domicilio en Ruta Nac. 36 - KM. 601, Río Cuarto, Córdoba, desde el año 2006 investiga los efectos biológicos de contaminantes ambientales sobre los organismos, con especial atención al efecto sobre el material genético de animales y vegetales (genotoxicología), y realiza el monitoreo genotoxicológico de poblaciones humanas expuestas a plaguicidas y arsénico; estudios de genotoxicidad in vitro en células humanas expuestas a plaguicidas; y estudios de la evolución de enfermedades ambientales en registros públicos de las localidades donde se monitorean las poblaciones humanas⁴, razón por la cual resulta trascendental contar con el aporte científico a título informativo proveniente de la universidad pública. Máxime ante la negativa de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UNT.

Los puntos de informe que requerimos sean evacuados, son los que V.S. indicó para la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UNT y que no fueron contestados por dicha institución, a saber:

a) ¿Cuáles son las distancias recomendadas para la fumigación terrestre con agroquímicos sin que esas sustancias representen peligro de daño para la salud humana a corto, mediano y largo plazo?

b) ¿Cuáles son las posibles consecuencias para la salud humana a corto, mediano y largo plazo, cuando esas distancias de aplicación de agroquímicos no son cumplidas?

c) Respecto de los agroquímicos glifosato (análogo de la glicina, N° de CAS:1071-83-6); herbicida Starane (1-metilheptil éster del ácido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético en equivalentes de ácido fluroxypyr) y MSMA (metil arsenato monosodico, herbicida órgano arsenado N° de CAS 2163-80-6), informe en cada caso:

* ¿Cuál es el riesgo para la salud humana en caso de contacto directo a 0 metros?

* ¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas?

* ¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto repetitivo y

⁴ Entre muchas otras referencias, la trayectoria del Laboratorio GEMA y su línea de investigación, surge de la nota de fecha 9-2-2022 de la Dirección de Prensa y Difusión de la Universidad Nacional de Río Cuarto: https://www.unrc.edu.ar/inc/n_completa.php?nota=36482.

cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas por varios meses) con ese agroquímico?

d) Respecto al agroquímico 2,4D, ácido 2,4 dicloro fenoxiacético, herbicida hormonal auxínico, N° de CAS: 94-75-7, informe:

*Teniendo en cuenta las posibles concentraciones con las que se presenta el producto: ¿Cuál es la diferencia en cuanto a toxicidad en humanos, cuando el producto contiene 40%, 60% y 80% de ácido 2,4 dicloro fenoxiacético en su formulación?

*¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto directo a 0 metros de distancia de una vivienda familiar?

*¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas?

*¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto repetitivo y cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas durante varios meses) con este agroquímico?

*¿Cuál es el riesgo para la salud humana de la exposición a los agroquímicos enunciados si son aplicados en forma combinada y repetida a lo largo del tiempo?

Proveer de conformidad es

JUSTICIA


Sergio Elias
González
34160155


María Eugenia
Soto Cabal
26655498

Ambiente y salud

Trabajo conjunto sobre la situación ecológica de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe

09 de Marzo de 2022

Participan seis universidades nacionales de la Región Centro

El Consejo Superior aprobó la firma de un convenio específico de continuidad de la Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud de la Región Centro (REDINASCE).

Participan las universidades nacionales de Rosario, Córdoba, Entre Ríos, Villa María, Río Cuarto y del Litoral.

Este acuerdo es una renovación del que se firmó en 2016.

La zona de trabajo cuenta con el 20 por ciento del total de habitantes del país y 390 mil kilómetros cuadrados.

El objetivo general de esta red es generar interadecuación de diferentes unidades académicas de la Región Centro, enfocando el abordaje inter y transdisciplinario de la interacción ambiental, la salud humana y la fauna, así como la biodiversidad.

Desde la UNRC, los trabajos se llevan a cabo en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, específicamente en el Departamento de Ciencias Naturales, Laboratorio de Genética y Mutagénesis Ambiental (GeMA), coordinado por la doctora Delia Aiassa y el doctor Fernando Mañas.

La línea de investigación que se desarrolla desde 2006 en el laboratorio GeMA aborda los efectos biológicos de contaminantes ambientales sobre los organismos, con especial atención al efecto sobre el material genético de animales y vegetales (Genotoxicología).

En la misma línea se implementan proyectos de extensión, servicios y transferencia.

Actualmente se trabaja en: monitoreo genotoxicológico de poblaciones humanas expuestas a plaguicidas y arsénico; estudios de genotoxicidad in vitro en células humanas expuestas a plaguicidas; estudios de genotoxicidad in vivo en animales de experimentación (ratas Wistar) expuestas a plaguicidas; estudios de toxicidad aguda en invertebrados para determinación de calidad de agua; y estudios de la evolución de enfermedades ambientales en registros públicos de las localidades donde se monitorean las poblaciones humanas.

DIRECCIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
prensa@rec.unrc.edu.ar

**Mas noticias**

Hoja Aparte



Unirio TV



Radio UNRC



Inscripciones



Aulas y horarios



PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL MONTEROS
Juzgado en lo Civil y Comercial Común I

ACTUACIONES N°: 149/23



H3020163687

**AUTOS: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS
c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO. EXPTE. N°149/23.-**

Monteros, 09 de noviembre de 2023.

I)- Proveyendo presentación de fecha 07/11/2023 realizada por la Dra. Garcia Alcy Adriana:

A lo solicitado y especialmente teniendo en consideración lo informado por la Cátedra de Toxicología Facultad de Medicina de la U.N.T: líbrese oficio al **Laboratorio GeMA - Genética y Mutagénesis Ambiental** del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), a fin de que informe: **a)** ¿Cuáles son las distancias recomendadas para la fumigación terrestre con agroquímicos sin que esas sustancias representen peligro de daño para la salud humana a corto, mediano y largo plazo? **b)** ¿Cuáles son las posibles consecuencias para la salud humana a corto, mediano y largo plazo, cuando esas distancias de aplicación de agroquímicos no son cumplidas?. **c)** Respecto de los agroquímicos glifosato (análogo de la glicina, N° de CAS:1071-83-6); herbicida Starane (1-metilheptil éster del ácido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético en equivalentes de ácido fluroxypyr) y MSMA (metil arsenato monosodico, herbicida órgano arsenado N° de CAS 2163-80-6), informe en cada caso: * ¿Cuál es el riesgo para la salud humana en caso de contacto directo a 0 metros? * ¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas? * ¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto repetitivo y cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas por varios meses) con ese agroquímico?**d)** Respecto al agroquímico 2,4D, ácido 2,4 dicloro fenoxiacético, herbicida hormonal auxínico, N° de CAS: 94-75-7, informe: *Teniendo en cuenta las posibles concentraciones con las que se presenta el producto: ¿Cuál es la diferencia en cuanto a toxicidad en humanos, cuando el producto contiene 40%, 60% y 80% de ácido 2,4 dicloro fenoxiacético en su formulación? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto directo a 0 metros de distancia de una vivienda familiar? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas? *¿Cuál es el riesgo

para la salud humana debido al contacto repetitivo y cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas durante varios meses) con este agroquímico? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana de la exposición a los agroquímicos enunciados si son aplicados en forma combinada y repetida a lo largo del tiempo?.

II)- Intímese al Dr. Pedro S. Cruz, de que acredite el diligenciamiento del oficio dirigido al SENASA, depositado en su casillero digital en fecha 23/10/2023, en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de ley.-^{MER} **FDO. DRA. LUCIANA ELEAS. JUEZA.-**

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=ELEAS Luciana, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27311282366, Fecha:09/11/2023;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>

Adjunto y pido reiteración

SEÑORA JUEZ CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA IA NOMINACIÓN.
CENTRO JUDICIAL MONTEROS.-

EXPEDIENTE: 149/23 SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ
EXEQUIEL ELIAS C/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. S/ AMPARO

Pedro Segundo Cruz, en estos autos a V.S. respetuosamente digo:

1-Que he diligenciado el oficio ante SENASA el 26 de Octubre de 2023. Tenga por cumplida la intimación recibida. Atento no haber sido respondido y siendo de mero trámite pido se reitere con apercibimiento de ley.

2- Adjunto oficio diligenciado a la Dirección de Agricultura (Tucumán).-

JUSTICIA



Expediente: 149/23

Carátula: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS C/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. S/ AMPARO

Unidad Judicial: JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN I
Tipo Actuación: OFICIO CASILLERO VIRTUAL CON FIRMA DIGITAL
Fecha Depósito: 23/10/2023 - 04:38
Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:
20211220296 - SOTILLO, SILVIO CARLOS-DEMANDADO

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL MONTEROS

Juzgado en lo Civil y Comercial Común I

ACTUACIONES N°: 149/23



H3020162108



Monteros, 19 de octubre de 2023

AL SR. DIRECTOR

DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA PCIA DE TUCUMÁN.

S/D

JUICIO: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. S/ AMPARO - EXPTE. N°: 149/23.

En los autos del rubro que se tramitan por ante éste Juzgado en lo Civil y Comercial Común, Centro Judicial Monteros, a cargo de la Dra. Luciana Eleas, Secretaría a cargo de la Dra. María Rocío Guerra, se ha dispuesto dirigir el presente a fin de que tome razón y dé cumplimiento con el proveído, que en su parte pertinente, a continuación se transcribe: "Monteros, 18 de octubre de 2023 (...) VII)- Librese oficio a la Dirección de Agricultura del Ministerio de Producción de la Pcia de Tucumán, a fin de que informe: a) Si los pesticidas identificados como glifosato; 2,4D; MSMA (sal mono sódica del ácido metil arsénico); herbicida Starane y sustancias coadyudantes, son de uso permitido en la Provincia. b) Si existen restricciones para su aplicación. c) A qué distancia se sugiere aplicar estas sustancias (con vehículos autopropulsados, de arrastre) de otras propiedades colindantes para evitar lesiones a la salud de las personas que allí habitaran o a otras plantaciones y/o huertas familiares. d) ¿Cuál es la distancia mínima de aplicación en el caso de fumigación aérea según la legislación vigente en la materia en nuestra Provincia? e) ¿Cuáles son las medidas de seguridad y las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que rigen para la fumigación con los agroquímicos MSMA (sal monosódica del ácido metil arsénico); herbicida marca comercial Starane; 2,4D en todas sus sales y glifosato? Detalle en cada caso particular según el plaguicida indicado? f) ¿Cuáles son las condiciones meteorológicas que deben ser contempladas para su aplicación? g) Si existe tecnología disponible en la Provincia con aptitud para reducir el riesgo de derivas y, en su caso, si es de uso frecuente o accesible. h) Si es posible que se generen consecuencias negativas en el ambiente y en la salud de los vecinos de las derivas secundarias (24 hs. siguientes a la aplicación) y terciarias (semanas o meses posteriores), teniendo en consideración las posibles condiciones meteorológicas. i) Si la exposición reiterada y las malas prácticas reiteradas, son pasibles de ocasionar daños al ambiente o a la salud en el corto, mediano y largo plazo; j) Si las tareas de registros y autorizaciones de los agroquímicos ya mencionados tienen plazo de caducidad y si se realizan con periodicidad los controles de riesgos; k) Si existe una clasificación de bandas toxicológicas y cuáles son los productos que pueden aplicarse en las distintas bandas. l)

Cuál es la pérdida productiva de un lote si no se combaten sus malezas."FDO. DRA. LUCIANA
ELEAS - JUEZA.-JMC.

SALUDO A UD. ATTE.

Art. 411.- PLAZO PARA LA CONTESTACIÓN. RETARDO. Los informes deberán ser evacuados dentro del término de diez (10) días de haber sido recibidos o del menor plazo que fije el tribunal, bajo apercibimiento de las sanciones que el tribunal considere, no admitiéndose, cuando se tratara de oficinas públicas, la exigencia previa de requisitos o cumplimiento de recaudos de ninguna naturaleza.

La falta de presentación dentro del plazo fijado hace responsable de los daños causados a la persona encargada de evacuarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder por desobediencia a una orden judicial y la aplicación de sanciones conminatorias.-

Art. 137.- SANCIONES CONMINATORIAS. Tendrán facultades para exigir el cumplimiento de las providencias, ordenes y sentencias que expidan en el ejercicio de su función, para lo cual la autoridad competente estará obligada a asistírlas con la fuerza pública, si ella fuera necesaria.

Podrán también aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes o los terceros cumplan sus mandatos, cuyo importe sera a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Se graduarán conforme al monto del juicio y caudal económico de quien debe satisfacerlas, como de las demás circunstancias de autos, referentes al grado de su desobediencia, rebeldía o resistencia, y se efectuarán previa intimación, bajo apercibimiento expreso, por un (1) día, sin perjuicio de que sean dejadas sin efecto o se reajusten si el obligado desiste de su postura y justifica total o parcialmente su proceder.

OFICIO DEPOSITADO EN CASILLERO DIGITAL: 20211220296

Actuación firmada en fecha 20/10/2023

Certificado digital:
CN=ROBLES Maria Emilse, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27289198933

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.



Expediente: 149/23

Carátula: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS C/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. S/ AMPARO

Unidad Judicial: JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN I

Tipo Actuación: OFICIO CASILLERO VIRTUAL CON FIRMA DIGITAL

Fecha Depósito: 23/10/2023 - 04:38

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

20211220296 - SOTILLO, SILVIO CARLOS-DEMANDADO

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL MONTEROS

Juzgado en lo Civil y Comercial Común I

ACTUACIONES N° 149/23



113020162091

Monteros, 19 de octubre de 2023.



Sin documentación adjunta.

A LAS AUTORIDADES DEL (S.E.N.A.S.A)

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

S/D

JUICIO: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO - EXPTE. N°: 149/23.

En los autos del rubro que se tramitan por ante éste Juzgado en lo Civil y Comercial Común, Centro Judicial Monteros, a cargo de la Dra. Luciana Eleas, Secretaría a cargo de la Dra. María Rocío Guerra, se ha dispuesto dirigir el presente a fin de que tome razón y dé cumplimiento con el proveído, que en su parte pertinente, a continuación se transcribe: "Monteros, 18 de octubre de 2023. (...) VII)- Librese oficio a las autoridades del SENASA de la Nación, a fin de que informe: a) Si los pesticidas identificados como glifosato; 2,4D; MSMA (sal mono sódica del ácido metil arsénico); herbicida Starane y sustancias coadyudantes, son de uso permitido en la Provincia. b) Si existen restricciones para su aplicación. c) A qué distancia se sugiere aplicar estas sustancias (con vehículos autopropulsados, de arrastre) de otras propiedades colindantes para evitar lesiones a la salud de las personas que allí habitaran o a otras plantaciones y/o huertas familiares. d) ¿Cuál es la distancia mínima de aplicación en el caso de fumigación aérea según la legislación vigente en la materia en nuestra Provincia? e) ¿Cuáles son las medidas de seguridad y las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que rigen para la fumigación con los agroquímicos MSMA (sal monosódica del ácido metil arsénico); herbicida marca comercial Starane; 2,4D en todas sus sales y glifosato? Detalle en cada caso particular según el plaguicida indicado? f) ¿Cuáles son las condiciones meteorológicas que deben ser contempladas para su aplicación? g) Si existe tecnología disponible en la Provincia con aptitud para reducir el riesgo de derivas y, en su caso, si es de uso frecuente o accesible. h) Si es posible que se generen consecuencias negativas en el ambiente y en la salud de los vecinos de las derivas secundarias (24 hs. siguientes a la aplicación) y terciarias (semanas o meses posteriores), teniendo en consideración las posibles condiciones meteorológicas. i) Si la exposición reiterada y las malas prácticas reiteradas, son pasibles de ocasionar daños al ambiente o a la salud en el corto, mediano y largo plazo; j) Si las tareas de registros y autorizaciones de los agroquímicos ya mencionados tienen plazo de caducidad y si se realizan con periodicidad los controles de riesgos; k) Si existe una clasificación de bandas toxicológicas y cuáles son los

no se combaten sus malezas."FDO. DRA. LUCIANA ELEAS - JUEZA.-JMC.

SALUDO A UD. ATTE.

Art. 411.- PLAZO PARA LA CONTESTACIÓN. RETARDO. Los informes deberán ser evacuados dentro del término de diez (10) días de haber sido recibidos o del menor plazo que fije el tribunal, bajo apercibimiento de las sanciones que el tribunal considere, no admitiéndose, cuando se tratara de oficinas públicas, la exigencia previa de requisitos o cumplimiento de recaudos de ninguna naturaleza.

La falta de presentación dentro del plazo fijado hace responsable de los daños causados a la persona encargada de evacuarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder por desobediencia a una orden judicial y la aplicación de sanciones conminatorias.-

Art. 137.- SANCIONES CONMINATORIAS. Tendrán facultades para exigir el cumplimiento de las providencias, ordenes y sentencias que expidan en el ejercicio de su función, para lo cual la autoridad competente estará obligada a asistirlos con la fuerza pública, si ella fuera necesaria.

Podrán también aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes o los terceros cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Se graduarán conforme al monto del juicio y caudal económico de quien debe satisfacerlas, como de las demás circunstancias de autos, referentes al grado de su desobediencia, rebeldía o resistencia, y se efectuarán previa intimación, bajo apercibimiento expreso, por un (1) día, sin perjuicio de que sean dejadas sin efecto o se reajusten si el obligado desiste de su postura y justifica total o parcialmente su proceder.

OFICIO DEPOSITADO EN CASILLERO DIGITAL: 20211220296

Actuación firmada en fecha 20/10/2023

Certificado digital:

CN=ROBLES Maria Emile. C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27289198933

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.



productos que pueden aplicarse en las distintas bandas. I)Cuál es la pérdida productiva de un lote si no se combaten sus malezas."FDO. DRA. LUCIANA ELEAS - JUEZA.-JMC.

SALUDO A UD. ATTE.

Art. 411.- PLAZO PARA LA CONTESTACIÓN. RETARDO. Los informes deberán ser evacuados dentro del término de diez (10) días de haber sido recibidos o del menor plazo que fije el tribunal, bajo apercibimiento de las sanciones que el tribunal considere, no admitiéndose, cuando se tratara de oficinas públicas, la exigencia previa de requisitos o cumplimiento de recaudos de ninguna naturaleza.

La falta de presentación dentro del plazo fijado hace responsable de los daños causados a la persona encargada de evacuarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder por desobediencia a una orden judicial y la aplicación de sanciones conminatorias.

Art. 137.- SANCIONES CONMINATORIAS. Tendrán facultades para exigir el cumplimiento de las providencias, ordenes y sentencias que expidan en el ejercicio de su función, para lo cual la autoridad competente estará obligada a asistirlos con la fuerza pública, si ella fuera necesaria.

Podrán también aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes o los terceros cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Se graduarán conforme al monto del juicio y caudal económico de quien deba satisfacerlas, como de las demás circunstancias de autos, referentes al grado de su desobediencia, rebeldía o resistencia, y se efectuarán previa intimación, bajo apercibimiento expreso, por un (1) día, sin perjuicio de que sean dejadas sin efecto o se reajusten si el obligado desiste de su postura y justifica total o parcialmente su proceder.

OFICIO DEPOSITADO EN CASILLERO DIGITAL: 20211220296

Actuación firmada en fecha 20/10/2023

Certificado digital:

CN=ROBLES Maria Emilse, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27289198933

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.



CENTRO JUDICIAL MONTEROS
Juzgado en lo Civil y Comercial Común I



9 780203 241267

H3020163798

AL LABORATORIO GEMA - GENÉTICA Y MUTAGÉNESIS AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS
FÍSICO-QUÍMICAS Y NATURALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO

En los autos del rubro que se tramitan por ante éste Juzgado en lo Civil y Comercial Común, Centro Judicial Monteros, a cargo de la Dra. Luciana Eleas, Secretaría a cargo de la Dra. María Rocío Guerra, se ha dispuesto dirigir el presente a fin de que tome razón y dé cumplimiento con el proveído, que en su parte pertinente, a continuación se transcribe: "Monteros, 09 de noviembre de 2023. (...) Líbrese oficio al **Laboratorio GeMA - Genética y Mutagénesis Ambiental** del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), a fin de que informe: **a)** ¿Cuáles son las distancias recomendadas para la fumigación terrestre con agroquímicos sin que esas sustancias representen peligro de daño para la salud humana a corto, mediano y largo plazo? **b)** ¿Cuáles son las posibles consecuencias para la salud humana a corto, mediano y largo plazo, cuando esas distancias de aplicación de agroquímicos no son cumplidas?. **c)** Respecto de los agroquímicos glifosato (análogo de la glicina, N° de CAS:1071-83-6); herbicida Starane (1-metilheptil éster del ácido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético en equivalentes de ácido fluroxypyr) y MSMA (metil arsenato monosodico, herbicida órgano arsenado N° de CAS 2163-80-6), informe en cada caso: * ¿Cuál es el riesgo para la salud humana en caso de contacto directo a 0 metros? * ¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas? * ¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto repetitivo y cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas por varios meses) con ese agroquímico?**d)** Respecto al agroquímico 2,4D, ácido 2,4 dicloro fenoxiacético. herbicida hormonal auxínico. N° de CAS: 94-75-7. informe:

*Teniendo en cuenta las posibles concentraciones con las que se presenta el producto: ¿Cuál es la diferencia en cuanto a toxicidad en humanos, cuando el producto contiene 40%, 60% y 80% de ácido 2,4 dicloro fenoxiacético en su formulación? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto directo a 0 metros de distancia de una vivienda familiar? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto sostenido durante varias horas? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana debido al contacto repetitivo y cíclico (campañas agrícolas anuales extendidas durante varios meses) con este agroquímico? *¿Cuál es el riesgo para la salud humana de la exposición a los agroquímicos enunciados si son aplicados en forma combinada y repetida a lo largo del tiempo?". **FDO. DRA. LUCIANA ELEAS.- JUEZA.**-MIA.

SALUDO A UD. ATTE.

Art. 411.- PLAZO PARA LA CONTESTACIÓN. RETARDO. Los informes deberán ser evacuados dentro del término de diez (10) días de haber sido recibidos o del menor plazo que fije el tribunal, bajo apercibimiento de las sanciones que el tribunal considere, no admitiéndose, cuando se tratara de oficinas públicas, la exigencia previa de requisitos o cumplimiento de recaudos de ninguna naturaleza.

La falta de presentación dentro del plazo fijado hace responsable de los daños causados a la persona encargada de evacuarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder por desobediencia a una orden judicial y la aplicación de sanciones conminatorias.-

Art. 137.- SANCIONES CONMINATORIAS. Tendrán facultades para exigir el cumplimiento de las providencias, ordenes y sentencias que expidan en el ejercicio de su función, para lo cual la autoridad competente estará obligada a asistirlos con la fuerza pública, si ella fuera necesaria.

Podrán también aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes o los terceros cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Se graduarán conforme al monto del juicio y caudal económico de quien debe satisfacerlas, como de las demás circunstancias de autos, referentes al grado de su desobediencia, rebeldía o resistencia, y se efectuarán previa intimación, bajo apercibimiento expreso, por un (1) día, sin perjuicio de que sean dejadas sin efecto o se reajusten si el obligado desiste de su postura y justifica total o parcialmente su proceder.

OFICIO DEPOSITADO EN CASILLERO DIGITAL: 27240569219

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=ROBLES Maria Emilse, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27289198933, Fecha:10/11/2023;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>



RESPUESTA OFICIO JUDICIAL

Sr. JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL
I NOMINACIÓN
CENTRO JUDICIAL MONTEROS

JUICIO: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS c/
SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO
EXPTE. JUD. N°: 149/23

Dra. Sandra Elizabeth Iñigo en mi carácter de Asesora Letrada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Producción, me presento ante V.S y digo:

Vengo a responder el oficio digital N° H3020162108 remitido a la Dirección de Agricultura, cuya estructura funciona actualmente bajo la dependencia de la Subsecretaría de Estado de Desarrollo Productivo, dependiente de esta Secretaría.

A esos fines, acompaño informe brindado por la citada Subsecretaría a fin de dar cumplimiento con lo requerido.

Atentamente.-

Dra. SANDRA ELIZABETH IÑIGO
ASESORA LETRADA
Direcc. Asuntos Jurídicos -.



TUCUMÁN, 09 de noviembre de 2023

Sra Jueza Civil y Comercial Común
DRA. LUCIANA ELEAS
Centro Judicial Monteros
Su Despacho

REF. Expte N° 1765/330-J-2023

Dante Martín Lazarte, en mi carácter de Subsecretario de Desarrollo Productivo de la provincia de Tucumán tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo del OFICIO JUDICIAL N° H3020162108 remitido en el juicio caratulado "SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS c/ SOTILLO CARLOS Y OT. s/ AMPARO - EXPTE. N° 149/23".

Cumplimos en informar lo solicitado por la manda judicial:

Respecto del Punto a) **Si los pesticidas identificados como glifosato; 2,4D; MSMA (sal mono sódica del ácido metil arsénico); herbicida Starane y sustancias coadyudantes, son de uso permitido en la Provincia.**

Informamos que los fitosanitarios GLIFOSATO, 2,4 D, MSMA, STARANE (nombre comercial) y las sustancias coadyuvantes en general, son todos productos autorizados por el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).

Todos los fitosanitarios aprobados por el SENASA se encuentran autorizados a nivel provincial.

El SENASA es un organismo en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. En virtud del Artículo N° 4 de la Ley Provincial N° 6.291/91 se establece que es condición indispensable que la sustancia, producto o dispositivo esté autorizado por las autoridades nacionales competentes.

Respecto del punto **b) Si existen restricciones para su aplicación.**


Ing. Agr. DANTE MARTIN LAZARTE
SUBSECRETARIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO



De los fitosanitarios consultados en el apartado a), el único que se encuentra "Restringido" en su uso en la Provincia de Tucumán, es el 2,4D bajo cualquier formulación. Su uso es para aplicaciones terrestre y prescrito bajo receta agronómica en la Provincia de Tucumán,

Respecto del punto c) **A qué distancia se sugiere aplicar estas sustancias (con vehículos autopropulsados, de arrastre) de otras propiedades colindantes para evitar lesiones a la salud de las personas que allí habitaran u otras plantaciones y/o huertas familiares.**

Para aplicaciones terrestres la Ley N° 6.291 y el Decreto Reglamentario 299/3 no contemplan distancias mínimas.

El manejo de los fitosanitarios se adecua a las indicaciones disponibles en el marbete de cada uno de los productos fitosanitarios conforme lo establece su receta agronómica, la cual incluye todas las consideraciones para su uso adecuado y dentro de la reglamentación aplicable.

Respecto de las distancias para las aplicaciones en general se recomienda respetar las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) para la aplicación de productos fitosanitarios en general. Se trata de prácticas extendidas y de público conocimiento en el área.

Respecto del punto d) **¿Cuál es la distancia mínima de aplicación en el caso de fumigación aérea según la legislación vigente en la materia en nuestra Provincia?**

Cuando se utilicen equipos aéreos se establecen las siguientes recomendaciones:

1. No efectuar aplicaciones de productos herbicidas plaguicidas, cuando la velocidad del viento exceda a los quince kilómetros por hora.
2. Operar a una distancia mayor de dos mil metros de los centros poblados, no pudiendo sobrevolarlos aún después de haber agotado su carga. A los fines de la ley los centros poblados deben tener una organización municipal o comunal, aunque sea a nivel de comisión vecinal.

Respecto del punto e) **¿Cuáles son las medidas de seguridad y las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que rigen para la fumigación con los agroquímicos MSMA (sal monosódica del ácido metil arsénico); herbicida**



marca comercial Starane; 2,4D en todas sus sales y glifosato? Detalle en cada caso particular según el plaguicida indicado

Las buenas prácticas agrícolas son recomendaciones que incluyen a todos los fitosanitarios en general y no versan sobre productos específicos.

Procedemos a realizar una enunciación ejemplificativa de las BPA:

1. Antes de la aplicación:

- Contar con la receta agronómica para los productos de banda toxicológica roja, amarilla y restringidos (2,4D);
- Leer las indicaciones de los envases;
- Comprar en distribuidores habilitados;
- Verificar la fecha de vencimiento y N° de lote;
- Transportar los productos apartados de animales, forrajes y alimentos;
- Dar aviso a las autoridades locales, escuelas y apicultores;
- Medir las condiciones climáticas;
- Calibrar las máquinas pulverizadoras;
- Usar equipo de protección personal;
- Lavar los envases mediante el triple lavado o lavado a presión;
- Perforar los envases para que no sean reutilizados.

2. Durante la aplicación:

- Verificar las condiciones climáticas;
- Usar el equipo de protección personal;
- Controlar la presión del equipo;
- Respetar la forma de aplicación en zonas de amortiguamiento;
- Utilizar tarjetas hidrosensibles;
- Asegurarse de que no haya personas o animales en el área.

3. Después de la aplicación:

- Usar el equipo de protección personal;
- Lavar las máquinas pulverizadoras sobre una cama biológica;
- Respetar los tiempos de carencia;
- Respetar los tiempos de reingreso al lote;
- Entregar los envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio (CAT).


Ing. Agr. DANTE MARTIN LAZARTE
SUBSECRETARIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO



Respecto del punto f) **¿Cuáles son las condiciones meteorológicas que deben ser contempladas para su aplicación?**

Las condiciones meteorológicas que se deben tener en cuenta son la velocidad del viento, temperatura ambiente y humedad ambiente.

Respecto del punto g) **Si existe tecnología disponible en la Provincia con aptitud para reducir el riesgo de derivas y, en su caso, si es de uso frecuente o accesible.**

En los últimos años el avance de la tecnología, en cuanto a las aplicaciones y fitosanitarios ha sido muy importante.

A continuación procederemos a realizar una descripción de procesos y productos con aplicación de nuevas tecnologías con fines ejemplificativos.

1. En el caso de la formulación de productos, la aparición de la nanotecnología permite la reducción de la cantidad del principio activo que se aplica por hectárea y hace menos volátil el producto. Esto facilita una efectividad mayor en cuanto al control de la plaga en cuestión y un impacto menor en el medio ambiente.
2. Respecto de las sustancias coadyuvantes para la aplicación, existen en la actualidad distintas formulaciones que se utilizan para mejorar la uniformidad en la dispersión del producto, reducir el efecto de evaporación de las gotas y de esta manera reducir los riesgos de deriva.
3. En cuanto a los equipos utilizados para la aplicación de fitosanitarios (terrestres/aéreos), mejoraron respecto de su eficacia de aplicación debido a mejoras mecánicas que permiten regular la distancia, altura y eficiencia de aplicación. Los modernos cuentan con sistemas satelitales que regulan condiciones tanto de velocidad como de caudal de aplicación. En algunos casos leen a través de estos sistemas cuáles son los puntos dentro del lote donde existe la presencia de malezas, evitando las coberturas totales de aplicación.

Además estos equipos cuentan con una gama de elementos adicionales (p.ejem. pico antideriva, túneles de viento, etc), que se usan en cada caso según el lote, cultivo a tratar y condiciones reinantes.

4. Existen también elementos como anemómetros, higrómetros y termómetros para medir las condiciones de viento, agua y temperatura. Algunos son simples y manuales y otros más avanzados permiten contar con esta tecnología medible desde el celular, facilitando al asesor técnico contar con más información para la toma de decisiones.



Todos los ítems descritos con anterioridad son de fácil acceso, la frecuencia del uso puede definirse en razón a la tecnología que pueda manejar el productor.

Respecto del punto h) **Si es posible que se generen consecuencias negativas en el ambiente y en la salud de los vecinos de las derivas secundarias (24 hs. siguientes a la aplicación) y terciarias (semanas o meses posteriores), teniendo en consideración las posibles condiciones meteorológicas.**

Todo mal uso de fitosanitarios puede tener consecuencias negativas para el ambiente o la salud de las personas. Por ello la importancia seguir las pautas de las buenas prácticas agrícolas para las aplicaciones.

Respecto del punto i) **Si la exposición reiterada y las malas prácticas reiteradas son pasibles de ocasionar daños al ambiente o a la salud en el corto, mediano y largo plazo;**

Es posible que la exposición reiterada y las malas prácticas reiteradas sean pasibles de ocasionar daños al ambiente o a la salud en el corto, mediano y largo plazo.

Respecto del punto j) **Si las tareas de registros y autorizaciones de los agroquímicos ya mencionados tienen plazo de caducidad y si se realizan con periodicidad los controles de riesgos;**

El SENASA es el organismo con competencia respecto de todos los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en el territorio nacional, por lo que los trámites de registro y autorizaciones son realizados ante tal autoridad nacional.

La provincia de Tucumán adhiere a dichas autorizaciones.

Respecto del punto k) **Si existe una clasificación de bandas toxicológicas y cuáles son los productos que pueden aplicarse en las distintas bandas.**


Ing. Agr. DANTE MARTIN LAZARTE
SUBSECRETARIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO



Los agroquímicos se clasifican de acuerdo a su toxicidad en banda roja, amarilla, azul y verde. Esta clasificación es aprobada por la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Los productos de cada banda toxicológica tienen sus indicaciones de uso en el marbete de la receta agronómica y en el etiquetado de sus envases, conforme la reglamentación de cada una.

Respecto del punto I)Cuál es la pérdida productiva de un lote si no se combaten sus malezas.

Las malezas compiten con los cultivos por el agua, nutrientes del suelo, espacio y luz. También pueden ser afectados por la liberación de sustancias alelopáticas que disminuyan el desarrollo de los cultivos o deriven en su muerte.

Según la agresividad de las malezas puede producirse la pérdida total de un cultivo.

En general la disminución, en cuanto a la productividad de un cultivo implantado es muy variable, dependiendo del tipo de cultivo. No es lo mismo un cultivo anual (p. ejem. granos y oleaginosas) que cultivos plurianuales (p. ejem. caña de azúcar, citrus).

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarla con distinguida consideración.


Ing. Agr. DANTE MARTIN LAZARTE
SUBSECRETARIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL MONTEROS
Juzgado en lo Civil y Comercial Común I

ACTUACIONES N°: 149/23



H3020163829

**AUTOS: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS
c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO. EXPTE. N°149/23.-**

Monteros, 13 de noviembre de 2023.

I)- Proveyendo presentación de fecha 10/11/2023 realizada por el Dr. Pedro S. Cruz :

1)- Agréguese y téngase presente oficio dirigido al SENASA y a la Dirección de Agricultura debidamente recepcionados.

2)- Atento a lo solicitado: Líbrese nuevo oficio al SENASA, de igual tenor al librado en fecha 20/10/2023. Hágase saber que el informe requerido, deberá ser contestado en el plazo establecido en el art. 411 del CPCCT, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias (art. 137 del CPCCT). Asimismo hágase saber que es reiteración de oficio recepcionado en fecha 26/10/2023.

II)- Agréguese informe del Ministerio de Desarrollo Productivo y póngase a conocimiento de los interesados.-MER FDO. DRA. LUCIANA ELEAS. JUEZA.-

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=ELEAS Luciana, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27311282366, Fecha:13/11/2023;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Informe Técnico

Número: IF-2023-134385375-APN-DAYB#SENASA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 10 de Noviembre de 2023

Referencia: EX-2023-128325313- -APN-DGTYA#SENASA PODER JUDICIAL DE TUCUMAN CENTRO - JUDICIAL MONTEROS

Con relación a lo solicitado en el Expediente de la referencia, se informa que el SENASA tiene a su cargo el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en el que se inscriben los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el Territorio Nacional. La administración del Registro aludido es competencia de la Dirección Nacional de Protección Vegetal a través de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos de este Organismo, en cumplimiento de los requisitos establecidos por el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS Y ALCANCE PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA, aprobado por Resolución SAGPYA N° 350/99 y su modificatoria Resolución SENASA N° 302/12.

El listado completo de productos inscriptos se encuentra publicado en el siguiente link de nuestra página web:

<https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/productosveterinarios-fitosanitarios-y-fertilizantes/registro-nacional-de-terapeutica-vegetal>

Entre los productos inscriptos se encuentran productos formulados a base de los principios activos GLIFOSATO; 2,4 D; M.S.M.A.; FLUROXIPIR MEPTIL; y productos inscriptos como coadyuvantes.

La información publicada incluye las clases toxicológicas de los productos (ítem k).

Con el fin de asegurar el cuidado de la salud humana, animal y del medio ambiente, todos los productos de uso agrícola deben ser aplicados con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo, únicamente en los cultivos para los que se encuentran autorizados, respetando las indicaciones de su etiqueta: dosis, momento de aplicación y medidas precautorias, y cumpliendo las normas provinciales o municipales que en cada caso se apliquen.

Las provincias conservan las facultades constitucionales que les son propias, para la recomendación y el establecimiento de condiciones de aplicación o las prohibiciones que consideren necesarias.

Para ello los organismos provinciales y municipales cuentan con equipos de profesionales que están en condiciones de evaluar el establecimiento de las normativas que en cada caso se requiera, indicando las

condiciones de aplicación teniendo en cuenta no solamente la clase toxicológica de los productos a aplicar, sino también la distancia a poblados, áreas de escuela, las condiciones climáticas o cualquier otra característica particular del lugar.

Atento a ello, las condiciones de uso y aplicación de productos fitosanitarios requeridas en los ítems de la a) hasta la j) e i) deben ser solicitadas a las autoridades provinciales o municipales competentes en el lugar donde se realiza la tarea.

En la Provincia de Tucumán, se encuentra vigente la Ley 6291 cuyo objetivo es regular todas las acciones relacionadas con agroquímicos, a fin de asegurar su correcta utilización para proteger la salud humana, animal y vegetal, mejorar la producción agropecuaria y reducir los riesgos para el medio ambiente.

Sobre la aplicación de la Ley citada y de su Decreto Reglamentario N° 299/3/1996, además de la actualización de las normas citadas debería ser consultada la Dirección de Agricultura del Gobierno de Tucumán.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.10 13:59:24 -03:00

Nicolás Martín AUÑON
A cargo de la Dirección
Dirección de Agroquímicos y Biológicos
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.10 13:59:25 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Nota

Número: NO-2023-135019298-APN-DAJ#SENASA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 13 de Noviembre de 2023

Referencia: RESPUESTA - OFICIO JUDICIAL "SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS C/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. S/ AMPARO" – Expte 149/23 – Juz. Civ y Com Común I - MONT -EX-2023-128325313- -APN-DGTYA#SENASA

A: Sra. Juez - Dra. Luciana Eleas (Juz. Civ y Com Común I - MONTEROS),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

RESPUESTA - OFICIO JUDICIAL "SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS C/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. S/ AMPARO" – Expte 149/23 – Juz. Civ y Com Común I. – CENTRO JUDICIAL MONTEROS-

Marcos Apud, abogado, Matricula CAT 10.787, Matricula Federal inscripta en el Tomo 58 Folio 980 de la CSJN, en autos caratulados "**SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS C/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. S/ AMPARO " EXPTE. N° 149/23**", que se tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial Común I, de la ciudad de Monteros, Provincia de Tucumán ante V.S. me presento y respetuosamente digo:

I.- Que vengo por la presente a remitir la respuesta al Oficio Judicial librado al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA -SENASA-, adjuntando lo informado por la Dirección de Agroquímicos y Biológicos de este Servicio Sanitario, emitido mediante Informe IF-2023-134385375-APN-

DAYB#SENASA.

Siendo todo por cuanto se puede informar a V.S.,

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.13 11:23:14 -03:00

Marcos APUD
Asesor Legal
Dirección de Asuntos Jurídicos
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.13 11:23:14 -03:00

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
CENTRO JUDICIAL MONTEROS
Juzgado en lo Civil y Comercial Común I

ACTUACIONES N°: 149/23



H3020164009

**AUTOS: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS
c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO. EXPTE. N°149/23.-**

Monteros, 14 de noviembre de 2023.

I)- Agréguese informe del SENASA y póngase a conocimiento de los interesados.

II)- Atento al apartado que antecede, déjese sin efecto el libramiento del oficio al SENASA ordenado en proveído de fecha 13/11/2023.- MER **FDO. DRA. LUCIANA ELEAS. JUEZA.-**

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=ELEAS Luciana, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27311282366, Fecha:14/11/2023;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>

ACREDITAMOS DILIGENCIAMIENTO DE OFICIO

**JUICIO: "SESTO CABRAL MARÍA EUGENIA Y GONZÁLEZ EXEQUIEL ELÍAS c/ SOTILLO
SILVIO CARLOS Y OTROS s/ AMPARO AMBIENTAL" Expte. N° 149/23**

Señora Jueza Civil y Comercial Común

María Eugenia Sesto Cabral y Exequiel Elías González, parte actora en autos,
con el patrocinio letrado de **Adriana García Romano**, a V.S. respetuosamente decimos:

I. Acompañamos impresión del mensaje electrónico enviado el día 13-11-2023 por nuestra patrocinante a la dirección de correo oficial dalassa@exa.unrc.edu.ar del Laboratorio GEMA – Genética y Mutagénesis Ambiental del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con archivo adjunto del oficio librado en autos en fecha 10-11-2023 y depositado en el domicilio digital 27240569219 el 13-11-2023 (horas 04:38) para su tramitación.

II. Solicitamos que se agregue y se tenga presente el diligenciamiento efectuado.

Proveer de conformidad es

JUSTICIA


Exequiel Elías
González
34160155


Sesto Cabral
María Eugenia
26685498



adriana garcia romano <adrianagarcia romano@gmail.com>

OFICIO JUDICIAL - PEDIDO DE INFORME AL LABORATORI GEMA UNRC

1 mensaje

adriana garcia romano <adrianagarcia romano@gmail.com>

13 de noviembre de 2023, 15:52

Para: Delia AIASSA <daiassa@exa.unrc.edu.ar>

AL LABORATORIO GEMA - GENÉTICA Y MUTAGÉNESIS AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICO-QUÍMICAS Y NATURALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO

S / D

La que suscribe, Adriana García Romano, DNI 24.56.921, abogada (MP 2551), se dirige a Ustedes a fin de diligenciar el oficio que en archivo adjunto se acompaña, librado, en fecha 10-11-2023, en el juicio caratulado **"SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO" EXPTE. 149/23**, con trámite en el Juzgado en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Monteros, Provincia de Tucumán.

El oficio fue depositado el día 13-11-2023 (horas 04:38) en el domicilio digital: 27240569219 correspondiente a mi parte patrocinante de las personas amparistas para su tramitación.

Pongo en su conocimiento que los canales de comunicación oficiales del juzgado y a los que deberá ser dirigida vuestra respuesta son los siguientes: dirección de correo electrónico juzcivcjm@justucuman.gov.ar y/o celular provisto (3815784005), teléfono fijo (03863 424819).

El plazo para la contestación según el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán es de 10 días hábiles de haber sido recibidos (artículo 411).

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

Adriana García Romano.-

**OFICIO AL LABORATORIO GEMA UNRC 13-11-2023.pdf**

72K

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL MONTEROS
Juzgado en lo Civil y Comercial Común I

ACTUACIONES N°: 149/23



H3020164140

**AUTOS: SESTO CABRAL MARIA EUGENIA Y GONZALEZ EXEQUIEL ELIAS
c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OT. s/ AMPARO EXPTE N°149/23**

Monteros, 15 de noviembre de 2023.

**Proveyendo presentación de fecha 14/11/2023 realizada por la Dra
Alcy Adriana García Romano:**

Agréguese y téngase presente constancia de remisión via mail del oficio dirigido a Laboratorio GeMA - Genética y Mutagénesis Ambiental del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y póngase a conocimiento de las partes. **FDO. MARIA EMILSE ROBLES - PROSECRETARIA** (Art. 209 del C.P.C.yC.).-MER

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=ROBLES María Emilse, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27289198933, Fecha:15/11/2023;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>

AMPLIACIÓN DE LA FAZ PASIVA

JUICIO: “SESTO CABRAL MARÍA EUGENIA Y GONZÁLEZ EXEQUIEL ELÍAS c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OTROS s/ AMPARO AMBIENTAL” Expte. N° 149/23

Señora Jueza Civil y Comercial Común

María Eugenia Sesto Cabral y Exequiel Elías González, amparistas en autos, con el patrocinio letrado de **Adriana García Romano**, a V.S. respetuosamente decimos:

I. PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA FAZ PASIVA

1. Introducción. Antecedentes de relieve

Como surge de las constancias de autos mediante **sentencia de fecha 5-9-2023**, V.S. desestimó la revocatoria interpuesta por nuestra parte contra el punto 5 de la providencia del 28-8-2023 que dispuso, **de manera preliminar a la resolución de la cautelar impetrada**, la evacuación por la contraria del informe que establece el artículo 21 de la ley 6.944.

En esa ocasión dejó explícitamente sentado que:

*“... **No se trata de la bilateralización del proceso**, ni se evidencia en el caso la violación del art. 282 CPCCT, como lo indica la recurrente. Por el contrario, **el término que utiliza la norma es claro en cuanto alude a un pedido de información** -que debe ser **previo** al análisis de la admisibilidad de la vía y **al traslado de la demanda**- cuya omisión, como lo dispone el art. 59 de CPC, es causa de nulidad del proceso.”*

*“...**Se trata de información relevante para la resolución de una cautelar provisional y accesorio** hasta el dictado de la sentencia de fondo, sin vulnerar derechos de las contrarias.”*

*“... Esta **interpretación es concordante con la jurisprudencia vigente que ha considerado la necesidad de requerir el informe del art. 21 previo al dictado de medidas cautelares** (Cf. Cámara en lo Contencioso Administrativo - Sala 2 en autos: “Jati Marta Liliana y Otros Vs. Provincia De Tucumán S/ Amparo”, Nro. Expte: 600/20, Nro. Sent: 54 Fecha Sentencia 03/05/2021; “Carranza Aula María Vs. Instituto de Previsión Y Seguridad Social De Tucumán*

S/ Amparo”, Nro. Expte: 478/20, Nro. Sent: 612 Fecha Sentencia 14/12/2020, entre muchas otras).”

Además, en atención a las facultades conferidas por la norma del art. 21 del CPC y “...por aplicación de los principios de celeridad y concentración, **previo al dictado de la medida cautelar**”, estimó correspondiente requerir informes a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y a la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán.

Lo allí postulado fue compartido por la Cámara del fuero, conforme se desprende de los considerandos del decisorio de fecha 13-9-2023, que nuestra parte consintió expresamente en escrito datado el 19-9-2023.

Devuelto el expediente del Superior, en fecha 21-9-2023 solicitamos, con soporte en los arts. 21, ley 6.944 y 32 de la ley 25.675, la ampliación de los puntos de informes dispuestos en el decisorio del 5-9-2023.

Por proveído del 25-9- 2023, se ordenó por un lado “... **dar cumplimiento al punto 5 del proveído de fecha 28-8-2023** (requiérase a Silvio Carlos Sotillo DNI 22.397.031, al Ingenio Santa Rosa y/o Temas Industriales S.A. CUIT 30-71093835-7 y/o Bioenergía S.A CUIT 30-71113843-5 el informe del Art. 21 de la Ley 6.944 en un plazo de cuatro (04) días. A tal fin ofíciase, para que... informen de manera circunstanciada los antecedentes, motivos y fundamentos de la actuación impugnada, los preceptos legales en que se fundan y la prueba que existe acerca de la posición procesal de la parte actora...” y por otro se acogió parcialmente nuestro pedimento.

No habiéndose hecho aún efectivo el trámite de notificación a la contraria, el día jueves 21-9-2023, se produjo una nueva fumigación, hecho que fue puesto en conocimiento de V.S. en escrito ampliatorio del 27-9-2023 adjuntando la denuncia policial respectiva y el certificado médico que acredita la intoxicación aguda sufrida.

En fecha 17-10-2023 la parte demandada presentó el informe del art. 21 de la ley 6.944, adjuntando prueba documental y señalando a otras personas, como se verá infra, como titulares dominiales y explotadoras de los fundos en cuestión, a lo que se dispuso el 18-10-2023, en lo pertinente:

“... V)- Proveyendo presentación de fecha 17/10/2023 realizada por el Dr. Martínez Folquer Eduardo Sixto: 1- Téngase al Dr. Eduardo Folquer Eduardo

*Sixto como apoderado de Temas Industriales y de Bioenergía Santa Rosa, ... 5- **Téngase por presentado informe del art. 21 de la Ley n°6.944...** 6- A las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva opuestas: Oportunamente... 7- Teniendo en cuenta lo informado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y el oficio librado a la Dirección de Agricultura de la Provincia, atento al estado procesal de autos, a la solicitud de oficio a los fines de la visita técnica de las entidades mencionadas: por ahora no ha lugar. 8- A lo demás solicitado: oportunamente, una vez que se abra la causa a prueba.”*

*“VI)- Proveyendo presentación de fecha 17/10/2023 realizada por el Dr. Pedro Segundo Cruz: 1- Téngase a Silvio Carlos Sotillo por apersonado... 3- Téngase presente la documentación acompañada. 4- **Téngase por presentado informe del art. 21 de la Ley n°6.944.** 5- A las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva opuestas: Oportunamente.*

En ese decreto y al efecto de la resolución de la cautelar, de acuerdo a lo manifestado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, y en base a lo solicitado por los abogados Martínez Folquer y Cruz, se ofició al SENASA y nuevamente a la Dirección de Agricultura de la Provincia, cuyas contestaciones fueron agregadas el 15-11-2023.

Asimismo se dispuso oficiar a la Unidad de Decisión Temprana del Centro Judicial de Monteros y a la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento Especializada en Delitos contra la Propiedad y contra la Integridad Física del Centro Judicial Monteros que remitan todas las causas en las que figuren como víctimas las personas aquí amparistas; y ante la negativa de contestar el pedido de informe por la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (respuesta de fecha 7-11-2023), a petición de nuestra parte, a fin de contar con elementos relativos a los efectos de los agroquímicos en la salud humana, se ofició al Laboratorio GEMA -Genética y Mutagénesis Ambiental- del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, diligenciado el mismo día de su depósito en el casillero virtual de nuestra patrocinante (13-11-2023).

En la actualidad está pendiente de ser contestado el oficio ordenado por V.S. al Laboratorio GEMA de la UNRC.

De lo expuesto surge que no fue la finalidad de V.S. bilateralizar la causa en esta fase inicial, sino requerir en forma previa al dictado de la cautelar información circunstanciada a la contraria de acuerdo a lo establecido en el art. 21 CPC y antes del

traslado de la demanda (art. 59, ley 6.944), manteniéndose incólume nuestro derecho a ampliar la demanda al **no haber operado el límite temporal impuesto por el art. 419 del CPC y C**, ordenamiento ritual aplicable supletoriamente según lo establece el artículo art. 31 del CPC y C.

De todos modos, aunque se entienda que la accionada ha contestado la demanda junto con su informe circunstanciado del art. 21, y que se encuentra vencido el plazo para la presentación del escrito de responde, lo aquí impetrado -ampliación de la faz pasiva- resulta plenamente procedente.

Téngase presente que esas leyes de rito locales, por la naturaleza ambiental del proceso en marcha, deben ser **complementadas en un verdadero diálogo de fuentes con los estándares procesales fijados por la Ley General del Ambiente n° 25.675 (arts. 30, 32 y 33), el Acuerdo de Escazú (aprobado por ley 27.566)**, conforme lo invocó nuestra parte en escrito del 31-8-2023 y en presentación del 27-9-2023 donde pusimos en conocimiento la nueva fumigación acaecida el 21-9-2023 y el consecuente daño a la salud de ella derivado que vino a reconfigurar los hechos denunciados en la causa del epígrafe y evidenciar aún más la plena actualidad de la afectación invocada.

Al respecto Ricardo Lorenzetti¹ destaca que la normativa ambiental **“prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga”** y que “esta es una regla de “precedencia” lógica, que determina que, en casos de conflictos de fuentes, **el juez debe aplicar de modo prevalente la que tutela el bien ambiental.**

2. Plena procedencia de la ampliación de la faz pasiva aunque se tenga por notificada la demanda

Como es sabido, desde antiguo calificada doctrina y la jurisprudencia, analizando el artículo 331 del Código Procesal de la Nación -que establece hasta qué momento procesal el accionante puede transformar la demanda, como lo hace el art. 449 de nuestro ordenamiento ritual (ley 9.531)- han entendido que ***procede la ampliación aún después de notificada la demanda cuando se trata de la incorporación de sujetos que antes no pudieron ser identificados como integrantes de la relación procesal y sin cuya participación el juicio vería frustrada su finalidad.***

Así, Lino E. Palacio² señala que la demanda se transforma, cuando mediante

¹ “Teoría del Derecho ambiental”, La Ley, Buenos Aires, 2008, ps. 74 y 75.

² “Derecho Procesal Civil: Tomo I Nociones Generales”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1967,

un acto unitario tiene lugar la alteración de alguno de sus elementos objetivos –objeto o causa-. La configuración de esta vicisitud de la pretensión queda excluida, por consiguiente, siempre que la alteración sólo afecte a los sujetos activo o pasivo de aquélla.

En igual dirección Carlos Eduardo Fenochietto³ enseña que desde el momento en que la transformación de la demanda tiende a evitar todo cambio de la pretensión originaria, en su objeto o causa, perjudicando la defensa del accionado al amparo de la practicidad del trámite corresponde distinguir dos situaciones distintas:

a) La primera, cuando la modificación planteada implica un cambio decisivo respecto de la primitiva pretensión, bien porque se pide algo distinto o bien porque se ha alterado el relato fáctico, por causa imputable al actor. Aquí nos encontramos ante una nueva demanda.

b) La segunda se presenta **por una situación nueva que no ha podido ser contemplada al momento de iniciar la causa. Este último caso es digno de protección y nuestra jurisprudencia desde antiguo ha tratado de considerarlo en lo posible, en tanto la buena fe y la defensa se encuentren amparadas. Tal lo que ocurre cuando luego de notificada la demanda, se la amplía respecto de un codemandado que no pudo ser individualizado con anterioridad, pues en realidad aquí se beneficia, antes que perjudicarse, el demandado originario. Además, se evita un inútil dispendio de actividad jurisdiccional y la posibilidad del dictado de pronunciamientos contradictorios.**

Por su parte Clemente A. Díaz⁴ destaca que si bien la demanda es la expresión de la voluntad del actor que frente a una situación jurídica exige un pronunciamiento judicial, durante el curso del proceso pueden ocurrir circunstancias ajenas a aquella voluntad, que sin variar el objeto litigioso obliguen a una modificación. La regla al respecto es que el actor podrá transformar la demanda, en lo que dependa de su decisión, hasta la notificación de la demanda; pero si se trata de hechos ajenos a su voluntad, este momento se extiende más allá de la notificación.

La jurisprudencia ha sido conteste con esos postulados entendiendo en repetidas ocasiones que:

pág. 419. Manual de Derecho Procesal Civil, Decimoséptima Edición Actualizada, LexisNexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires 2003, p. 108.

³ "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado con los códigos provinciales", Ed. Astrea, 1999, Tomo II, págs. 343-344.

⁴ Bajo el seudónimo CARLO CARLI, 1973, "La Demanda Civil", Buenos Aires, Ed. Lex, págs.109-110.

“Existe transformación de la demanda, conforme lo establecido por el art. 331 del CPN, cuando se altera alguno de los elementos objetivos de la pretensión y **no cuando esa modificación altera a los sujetos o personas**” (CNCom, Sala A, 18/3/99, LL, 1999-C-737, 41.487-S, y ED, 184-669).

“No se altera la "causa petendi" y el objeto de la pretensión que es materia del litigio cuando **antes de abrirse la causa a prueba y sin modificar los términos de la demanda, se solicita integrar la litis con otro demandado. Ello no lesiona el derecho de defensa de los litigantes ya emplazados que contestaron la demanda.**” (CC0100 SN 970572 RSI-456-97 I 16-9-1997, Tribunal de origen: JC 0101).”

También se dijo en otro precedente que:

“En el caso que nos ocupa el actor de marras intenta en este estado del proceso, según sus dichos, trabar debidamente la litis argumentando las circunstancias que lo indujeron a error al promover la acción. Corresponde apreciar, entonces, a través de la jurisprudencia, cuál es su situación de continuarse el juicio sin que se haga lugar a su petición...”

“Cuando el actor no insta adecuadamente la integración de la litis con quien debe revestir calidad de parte demandada, no sólo corre el riesgo de obtener una sentencia lírica, cuya ejecución sería de imposible cumplimiento sino que - por añadidura- el dispendio alcanza a la prueba producida, no oponible a quien no fuera parte en el juicio.” (JUBA CC0002 SI 53558 RSD-25-91 S 21-2-1991)

“Cuando se comprueba que la litis se ha desarrollado sin la participación de un legitimado, corresponde declarar la nulidad de las actuaciones cumplidas con tal defecto y no disponer el rechazo de la demanda” (JUBA SCBA, Ac 61302 S 10-3-1998, TRIB. DE ORIGEN: CC0001LZ).”

“En definitiva, y adhiriendo a un fallo de la CNCom., sala D, febrero 25.1994 (ED.159: pag.456/58), señalamos que **la ampliación de la demanda prevista en el art. 331 del ritual se refiere, exclusivamente, a la elevación de la cuantía o del monto del reclamo; mientras que no lo es la integración de la litis con respecto a una persona que antes no había sido individualizada ni, por tanto, citada al proceso.**”(CámCiv, Sala I, 23-10-2001, "Henriquez César Marcelo c. El Valle S.A. s/ daños y perjuicios" Expte. N° 881-CA-1).

Y a mayor abundamiento en forma reciente se ponderó:

*“... en el caso, no se intentó alterar aspectos objetivos del reclamo sino **ampliar el universo subjetivo...** **La mera ampliación subjetiva de la demanda presenta una situación especial que torna controvertida la aplicación irrestricta de la regla del CPCyCN ART. 331.** El actor no quiso sustituir un demandado por otro sino **incorporar al juicio a una empresa ... a quien, al contestar las excepciones opuestas por la concesionaria, consideró corresponsable por los daños reclamados en el escrito inaugural. Esta situación generada cuando aún no se ha abierto la causa a prueba, merece una consideración favorable porque la incorporación de un nuevo demandado no viola el derecho de defensa del resto de los accionados** y, por cierto, porque la petición del actor pareciera haber sido hecha de buena fe. Adoptando ese temperamento favorable, no solo que no se afecta a los demandados ..., sino que se evita un inútil dispendio de actividad jurisdiccional y la posibilidad del dictado de pronunciamientos contradictorios si se forzara al actor a promover un nuevo juicio contra la que se pretende incorporar (v. Fenochietto, Carlos Eduardo; "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", tomo II, pág. 330, año 1999) (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, **“Garibaldi, Daniel Fernando c/ Lusardi, Facundo y otros s/ ordinario”**, sentencia 30-6-2022, Id SAIJ: SUN0032496).*

En definitiva, aunque en el sub lite se tenga por notificada la demanda y por contestada juntamente con el informe del art. 21 CPC, resulta plenamente **procedente -y necesaria- la ampliación de la faz pasiva**. Máxime cuando ha sido la propia parte accionada quien individualizó a los sujetos que revestirían la condición de dueños y/o explotadores de los fundos fumigados -dato que como se verá, no podía ser conocido por nuestra parte- y además se trata de integrantes del mismo grupo familiar, por lo que el factor sorpresa ha quedado descartado y no se advierte en absoluto la vulneración del derecho de defensa.

Todo ello asume preponderancia a la luz de la naturaleza de la presente causa, que exige un mayor compromiso con la verdad objetiva y el deber de flexibilizar los ritualismos que obstan o impidan **la tutela del bien ambiental en juego, íntimamente vinculado con la salud y la vida de las personas aquí amparistas**.

En ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho reiteradamente que:

*“En tal contexto, no puede desconocerse que, **en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio** que, sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del Tribunal contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador.” (CSJN, 329:3493; 339:201; 344:174).*

3. Relevancia de la ampliación de la demanda en su faz pasiva para garantizar el acceso a la jurisdicción ambiental y la tutela judicial efectiva. Situación de vulnerabilidad de las personas aquí amparistas

Ante todo es dable tener presente que, pese a la enorme dificultad que significa identificar a las personas humanas y/o jurídicas dueñas y/o explotadoras de los fundos rurales linderos a nuestra vivienda familiar -datos que no obran en el Registro Inmobiliario- en los que se realizaron las 14 fumigaciones denunciadas por nuestra parte, hemos aportado un cúmulo de prueba documental, testimonial y la producida en sede penal en pos de señalar a los particulares responsables de los actos lesivos.

También demostramos las relaciones de parentesco existentes entre las personas demandadas, como se plasmó en el capítulo VI. del escrito inicial (páginas 62-65), donde evidenciamos que el ingeniero Silvio Sotillo está casado con María Verónica Estofan, que a su vez es hermana de José María Estofan, presidente de Temas Industriales S.A. y de Gustavo Eduardo Estofan, director titular y presidente de Bioenergía Santa Rosa S.A. y apoderado general de Temas Industriales S.A., firmas que administran el Ingenio Santa Rosa.

Esas primeras barreras con las que tropieza el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales del tipo que nos ocupa, han sido reconocidas por la jurisprudencia. Así, en el precedente **“Holstein Eduardo Javier y Silguero Silvana c/ Estancia Las Raíces s/ Acción de amparo”**, que guarda contornos fácticos similares a los del sub lite, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, en fallo del 29-1-2018, ponderó que:

*“..., cabe considerar que **los actores, vecinos de zona rural, no se encuentran obligados a conocer el estado registral, la situación posesoria y la titularidad de la explotación lindera a su hogar. Máxime teniendo en cuenta los padecimientos sufridos** durante el plazo que tenían para poder promover esta acción, internados hasta el 10/12/2017. Y que, en*

*definitiva, tal como lo sostuviera al resolver la primera cuestión, la notificación de la demanda surtió el efecto deseado, al ser contestada por el arrendatario del establecimiento, quien precisamente realizara **las actividades de fumigación denunciadas**.*”

De igual modo ocurrió en el caso que traemos a debate, ***porque mientras estábamos siendo fumigados y sufriendo en carne propia los efectos de la contaminación***, tuvimos que ocuparnos, además del cuidado de nuestra salud gravemente deteriorada, de reunir la escasa información disponible en relación a las personas que explotan las parcelas vecinas, para poder acceder a la justicia en busca de la tutela de nuestros derechos fundamentales a vivir en un ambiente sano, a la salud y a la integridad personal.

No debe perderse de vista nunca que ***las personas aquí amparistas somos víctimas de la degradación ambiental*** por las sucesivas pulverizaciones de productos altamente tóxicos aplicados a cero metros de distancia de nuestra vivienda familiar en palmaria violación de la ley 6.291 y su reglamentación, y nos encontramos en estado de ***vulnerabilidad y de desigualdad*** en relación al grupo económico y empresario que explota los fundos linderos cuyos representantes viven alejados a cientos de kilómetros del lugar.

Justamente uno de los claros objetivos del Acuerdo de Escazú, ha sido la lucha contra la desigualdad y la discriminación y garantizar el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano, dedicando especial atención a quienes se hallan en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Al respecto, el art. 2 inciso e) del tratado define a las “personas o grupos en situación de vulnerabilidad” como aquellas “... *que encuentran **especiales dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso** reconocidos en el presente Acuerdo, por las circunstancias o condiciones que se entiendan en el contexto nacional de cada Parte y de conformidad con sus obligaciones internacionales.*”

En ese ineludible contexto y en el estado de vulnerabilidad que persiste, promovimos el presente amparo ambiental -en base a un sólido basamento fáctico y jurídico- con la finalidad de hacer cesar el proceso de daño (art. 30, LGA) ya iniciado con las pulverizaciones con plaguicidas que representan un claro riesgo para la salud humana, animal y vegetal (art. 1, ley 6.291), afectando nuestra calidad de vida en forma significativa.

Por su lado la parte demandada -Silvio Sotillo y las firmas Temas Industriales S.A. y Bioenergía Santa Rosa S.A. administradoras del Ingenio Santa Rosa-, sin voluntad alguna de hacer cesar la afectación de nuestros derechos, produjo el informe del art. 21, CPC,

acompañando distintos instrumentos -y ocultando otros-, **únicamente pasibles de ser aportados por ella por hallarse en su poder y ser de su exclusivo conocimiento.**

A título ejemplificativo, presentó el testimonio de escritura n° 72, pasada el 8-6-2022, ante el escribano Miguel Ángel Yapur Fernández, titular del registro 96, de la que surge que María Verónica Estofan -cónyuge de Silvio Sotillo- a cambio de la cesión de acciones que poseía en otra firma (Los Sauces S.R.L.) recibió de su hermano José María Estofan en calidad de presidente de Temas Industriales S.A., los fundos linderos a nuestra vivienda, que a su vez estarían siendo explotados por la sociedad Agropecuaria Don Eduardo S.A. (en formación) de la cual la propia María Verónica Estofan es presidenta y su esposo asesor técnico. En ese documento se consigna que la inscripción del dominio en el Registro Inmobiliario de esos campos **no se hizo efectiva por la falta de plano de mensura y de actualización parcelaria**, lo que confirma la dificultad probatoria por la ausencia de publicidad acerca de la titularidad dominial de los campos y en lo relativo a las distintas empresas constituidas por los hermanos Estofan.

Y todo ello mientras continuamos siendo fumigados y se avecina otra campaña agrícola.

Ahora bien, del minucioso cotejo de la instrumental adjuntada por la contraria -que abordaremos en el capítulo siguiente- y de sus propios dichos señalando a María Verónica Estofan y a la empresa de la que es presidenta -Agropecuaria Don Eduardo S.A.- en tanto dueña y explotadora de parcelas linderas a nuestra vivienda donde se llevaron a cabo las fumigaciones denunciadas, **se impone la necesidad de ampliar la demanda en su faz pasiva.**

En el caso de marras la incorporación de otros sujetos de la relación jurídica, se torna imprescindible al efecto de no frustrar el acceso a la jurisdicción ambiental (art. 32, LGA; art. 8, Acuerdo de Escazú) y a la tutela judicial efectiva de nuestra parte (arts. 8.1. y 25 de la CADH; Principio I. del Título Preliminar, ley 9.531), máxime cuando además han sido señalados por la propia demandada como titulares dueños y/o explotadores de las parcelas fumigadas.

El acceso a la justicia ambiental refiere a la posibilidad de obtener una solución judicial completa y expedita de un conflicto jurídico que tiene naturaleza ambiental⁵. Y para ello la normativa ambiental ha previsto un amplio abanico de tutelas diferenciadas a favor

⁵ SBDAR Claudia, “Tribunales especializados para la tutela efectiva del ambiente”, La Ley, 16 de marzo de 2017.

del justiciable en estos litigios.

Así el art. 32 de la LGA, prescribe: “El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales **no admitirá restricciones de ningún tipo o especie.**”

Analizando la norma, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires in re “Álvarez, Avelino y otra c/ El Trincante S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, sentencia del 25-9-2013, Id SAIJ FA13010391), señaló que:

“... A) En materia ambiental, el art. 32, primer párrafo de la ley 25.675 establece que: “La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte”.

“La norma es concluyente, calificando al acceso como irrestricto sin condiciones, sin limitaciones, sin reservas y completo, inclusive temporalmente. Esto implica la eliminación de todos los obstáculos, cargas o exigencias que pudieren regir para otro tipo de procesos. Es decir, no pueden erigirse vallas de ningún tipo o especie que de cualquier manera restrinjan la amplitud del criterio así legislado...”

“... C) **El proceso ambiental se tiñe plenamente de la relevancia que la propia materia sustantiva porta**, evidenciada con elocuencia en los arts. 28 de la Constitución de Buenos Aires y 41 de la Constitución nacional...”

“El acceso a la justicia en materia ambiental resulta ser una especie del género que Mauro Capelletti denominó el movimiento por el acceso a la justicia (Capelletti y Garth, “El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos”, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pág. 11). Para Morello, este concepto significa que **dentro del proceso se deben replantear, reducir y eliminar los obstáculos de hecho**

que impiden a tantísimas personas el poder valerse de la jurisdicción y el derecho a ser escuchado por los jueces en igualdad de armas, concepción que en materia ambiental cobrará nuevos bríos y se concentrará en progresivas llaves de reaseguramiento del sistema todo a efectos del logro adecuado de la protección del bien jurídico. Así, surgen nuevos factores a tomar en consideración: lo inexorable del tiempo, el rol que cumplen las medidas cautelares, la desigualdad con que cada parte ingresa al proceso, la consecuente diferenciación de roles procesales y sobre todo la naturaleza del bien jurídico que se posa sobre los conflictos a ser resueltos en la materia, un bien colectivo de titularidad compartida. (Augusto Mario Morello, "La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino", editora Platense, La Plata, 1999, pág. 105)."

Por su lado el artículo 8 del Acuerdo de Escazú, sobre el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales establece:

"... 3. Para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada Parte, considerando sus circunstancias, contará con: a) órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental; b) procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos; c) legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente,...; d) la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente; e) medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba; f) mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan; y g) mecanismos de reparación,..."

"4. Para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, cada Parte establecerá: a) medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia; b) medios de divulgación del derecho de acceso a la justicia y los procedimientos para hacerlo efectivo; c) mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan; y d) el uso de la interpretación o la traducción de idiomas distintos a los oficiales cuando sea necesario para el

ejercicio de ese derecho.”

*“5. **Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia**, cada Parte atenderá **las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad** mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita, según corresponda.”*

En conclusión, la normativa del bloque ambiental aplicable al sub lite refuerza la plena procedencia de la ampliación de la faz pasiva en la presente causa, ya que:

* No se está variando el hecho litigioso.

* Las nuevas circunstancias fueron traídas al debate por la propia demandada que señaló a las personas que presuntamente serían titulares dominiales de los campos fumigados y/o sus explotadoras.

* Esos contornos fácticos no podían ser conocidas por nuestra parte al momento de accionar.

* La buena fe de las personas amparistas que estamos sufriendo afectaciones a su salud como consecuencia de las fumigaciones denunciadas, luce evidente.

4. Aplicación de los principios pro homine, pro actione e in dubio pro natura

En caso de duda la solución que se brinde debe ser aquella que busque favorecer el acceso a la justicia ambiental con sustento en los ***principios pro homine, pro actione y pro natura***.

El primero de ellos en tanto “... *criterio hermenéutico que informa todo el Derecho de los derechos humanos, en virtud del cual **se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos** o, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria.*”⁶

Por su lado el ***principio pro actione*** orienta siempre a interpretar la acción interpuesta de la manera más favorable para la efectividad de los derechos y el logro de una

⁶ PINTO, Mónica. “El Principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, ABREGU, Martín y Christian COURTIS (Compiladores) Editores El Puerto, Bs. As. 1997, p. 163.

resolución válida sobre el fondo, entrañando ello la mayor flexibilidad de los requisitos formales sobre la base de que “*el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia*” (Principio VI. Instrumentalidad, flexibilidad y adecuación procesal, Título Preliminar, ley 9.531).

Y a ello se agrega, por el tipo de proceso en trámite, el principio pro natura, consagrado por primera vez por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “**Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/ acción de amparo ambiental**” (sentencia de fecha 11-7-2019, fallos 342:1203), donde dijo que:

*“... **los jueces deben considerar el principio in dubio pro natura** que establece que “en caso de duda, **todos los procesos ante tribunales, ... deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales.** No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN-, Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, reunido en la Ciudad de Río de Janeiro en abril de 2016) ...”*

La aplicación de esos principios al sub lite debe traducirse en la necesaria ampliación de la faz pasiva, incorporando al proceso a los sujetos que según lo informado por la parte accionada tendrían vinculación directa con la relación procesal entablada.

II. FUNDAMENTOS DE LA AMPLIACIÓN

En sendos informes ordenados de conformidad con las previsiones del art. 21 del CPC, tanto el co-accionado Silvio Sotillo como las firmas demandadas Temas Industriales S.A. y Bioenergía Santa Rosa S.A. -convocadas a este proceso en tanto explotadoras y/o administradoras del Ingenio Santa Rosa- han sindicado a la señora **María Verónica Estofan**, DNI 26.109.616, esposa del ingeniero Sotillo -según el mismo reconoce en su escrito- como la dueña de fundos linderos a nuestra vivienda familiar.

Ahora bien, del análisis de la documentación adjuntada por la contraria, surgen nuevos datos únicamente pasibles de ser presentados por ella y también se desprende la expresa omisión de otros que no fueron aclarados, pese a que, como tiene dicho la jurisprudencia local en relación a la importancia del informe que contempla el mentado art. 21 procesal “... *el sujeto destinatario del pedido de informe **tiene el deber de***

proporcionarle diciendo la verdad, y la obligación de adjuntar o poner a disposición del tribunal todos los elementos instrumentales que tuviere en su poder.”(CSJT, “Moreno Miguel Alberto Vs. Superior Gobierno De La Provincia S/ Acción de Amparo(habeas data)”, sentencia 989 del 21-11-2000)..

1. Informe art. 21 CPC del demandado Silvio Sotillo:

i) En primer término manifiesta que su cónyuge, **María Verónica Estofan**, “... **es propietaria de algunos de los inmuebles que rodean al de la actora**, conforme pacto vigente por escritura 134 del 30 de Noviembre de 2020, Registro N° 96. Estos inmuebles son **explotados por Agropecuaria Don Eduardo S.A.** ...”. El instrumento (escritura 134) no fue adjuntado.

ii) Acompaña copia del testimonio de la escritura pública n° 72, pasada el 8-6-2022, ante el escribano Miguel Ángel Yapur Fernández, titular del registro 96, en la que intervienen José María Estofan, DNI 31.267.379, como presidente de Temas Industriales S.A. y **María Verónica Estofan** en el carácter de **presidenta del directorio de Agropecuaria Don Eduardo S.A. (en formación)** CUIT N° 33-71699271-9, con domicilio legal en calle Sargento Juárez s/n de la localidad de León Rougés, Departamento Monteros, Tucumán.

Surge de ese instrumento que Temas Industriales S.A. cedió y transfirió a la firma Agropecuaria Don Eduardo S.A. los derechos y acciones de posesión, propiedad y litigiosos que tenía sobre un campo ubicado en Las Lanzas, departamento Chicligasta, ajeno al sub lite.

iii) Adjunta copia de la escritura pública 68, pasada el 7-6-2022, ante el escribano Miguel Ángel Yapur Fernández, titular del registro n° 96, en la que se instrumenta el convenio declarativo de su desvinculación de Temas Industriales S.A. y de una nueva empresa que allí se menciona **Labores y Servicios del Sur S.A. (LyTSSA), CUIT 30-71093837-3, de la que el propio Sotillo fue presidente** renunciado el 31-5-2022; cargo asumido por José María Estofan que interviene en el acto como presidente de ambas empresas Temas Industriales S.A. y Labores y Servicios del Sur S.A..

En realidad la denominación de la firma es **Labores y Trabajos del Sur S.A.**, por eso en la escritura se alude a ella con las siglas LyTSSA, con domicilio fiscal en Sargento Juárez S/N, León Rougés, Departamento Monteros, Tucumán, conforme se desprende de la documentación anexada por las propias Temas Industriales S.A. y Bionergía Santa Rosa S.A. al evacuar su informe.

Respecto a esas empresas señala que Temas Industriales S.A. "... , hasta junio del año 2022 al menos, estaba a cargo de explotar la molienda de caña de azúcar para la producción de azúcar. La segunda [Labores y Trabajos del Sur S.A.] fue, hasta junio del año 2022, quien llevaba adelante la explotación de los fundos cañeros siendo proveedor de la fábrica Ingenio Santa Rosa. Bioenergía Santa Rosa SA tiene otra actividad, vinculada a la producción de alcohol de la cual soy ajeno."

iv) En cuanto a las parcelas con cultivo de caña de azúcar objeto de las fumigaciones aéreas del 19-4-2023 y las dos del día 21-4-2023, cuyas coordenadas geográficas son 27.250509, -65.515651, aduce que "...estas fincas no se vinculan a Verónica Estofan ni ADESA", omitiendo precisar si son explotadas por el Ingenio Santa Rosa y/o Temas Industriales S.A. y/o Labores y Servicios del Sur S.A., dato que claramente no puede desconocer.

2. Informe art. 21 CPC de Temas Industriales S.A. y Bioenergía Santa Rosa S.A.:-

i) Por un lado afirman que "... los fundos señalados por los actores no pertenecen ni son arrendados por ninguno de mis mandantes. Los mismos pertenecen desde Junio de 2022 a la Sra. María Verónica Estofán, por cesión de acciones y derechos de dominio y posesión efectuada mediante escritura n° 71, autorizada por el registro notarial n° 96 en fecha 8/6/2022, cuya copia se adjunta al presente."

De la lectura del mencionado instrumento -que acompañan- surge que **María Verónica Estofan** cedente de las cuotas sociales de Los Sauces S.R.L. a la cesionaria **Temas Industriales S.A.**, representada por su presidente **José María Estofan**, recibe en pago de esas cuotas sociales un inmueble ubicado en Amberes, Monteros, Parcelas 1,2,3 y 4, compuesto de 5 padrones (4269-42270-42271-46834), dominio inscripto en Matrícula M-07746.

En la escritura se aclara puntualmente que "...[l]a inscripción del inmueble descrito en el registro inmobiliario **se encuentra pendiente debido a la falta de plano de mensura o actualización parcelaria, situación que la adquirente conoce y acepta...**".

ii) Del cotejo del croquis adjuntado surgiría que las **fumigaciones terrestres** denunciadas fueron realizadas en los fundos cuya titularidad es atribuida a la señora María Verónica Estofan y explotados por la firma Agropecuaria Don Eduardo S.A. de la cual María Verónica Estofan sería presidenta; pero omiten explícitamente toda manifestación relativa a las

fracciones de caña de azúcar fumigadas de manera aérea que en base a la información colectada son propiedad y/o están siendo explotadas a cualquier título por el Ingenio Santa Rosa y/o Silvio Sotillo.

iii) Al ofrecer prueba documental mencionan a la firma **Labores y Trabajos del Sur S.A.** CUIT 30-71093837-3 del siguiente modo: “... *a fin de visibilizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales adjunto documentación perteneciente a mis mandantes y a Labores y Trabajos del Sur, sociedad que explota sus fundos*”.

Como se vio ut supra Silvio Sotillo había sido presidente de la dicha sociedad firma, cargo asumido por su cuñado José María Estofan, también presidente de Temas Industriales S.A..

3. Se trata del mismo grupo familiar que representa y administra sociedades que explotan los campos fumigados

En definitiva, estamos en presencia del mismo grupo familiar, los hermanos Gustavo Eduardo, José María y María Verónica Estofan, esta última casada con Silvio Sotillo, con participación en las distintas sociedades propietarias y/o explotadoras de los campos fumigados:

* **José María Estofan**, DNI 31.267.379, presidente de **Temas Industriales S.A.** y de **Labores y Trabajos del Sur S.A.** (cf. escrituras públicas n° 68 del 7-6-2022 y n° 71 del 8-6-2022, registro notarial 96).

* **Gustavo Eduardo Estofan**, DNI 22.556.259, director titular y presidente de **Bioenergía Santa Rosa S.A.** (cf. poder general para juicios instrumentado en escritura pública n° 12, del 10-2-2020, registro 103) y apoderado general de **Temas Industriales S.A.** (de acuerdo al poder general para juicios instrumentado en escritura pública n°11 del 10-2-2020, registro 103).

* **María Verónica Estofan**, esposa del ingeniero Silvio Sotillo, dueña de los fundos linderos a nuestro inmueble que recibió en pago de la cesión de sus cuotas sociales en Los Sauces S.R.L. a **Temas Industriales S.A.** (cf. escritura n° 71 del 8-6-2022, registro 96) y presidenta de **Agropecuaria Don Eduardo S.A.** que sería la explotadora de dichos fundos (cf. escritura n° 72 del 8-6-2022, registro 96).

4. Sujetos a los que se amplía la demanda

En vista de lo expuesto ampliamos la demanda respecto de las personas humana y jurídicas que a continuación consignamos en tanto propietarias y/o arrendatarias y/o explotadoras a cualquier título de los fundos en los que se llevaron adelante las fumigaciones terrestres y aéreas denunciadas:

* **María Verónica Estofan**, DNI 26.109.616, domiciliada en Barrio La Corona Casa 9 de la ciudad de Concepción, Departamento Chicligasta, Tucumán.

* **Agropecuaria Don Eduardo S.A. (en formación)**, CUIT 33-71699271-9, con domicilio en Ruta 38 KM 740 0 - Lote/KM: sobre Ruta 38 Vieja Arcadia, 4147, Tucumán.

Denunciamos ese domicilio para su notificación ya que si bien en la escritura n° 72 del 8-6-2022, registro 96, se indica como domicilio legal de dicha firma el de calle Sargento Juárez s/n de la localidad de León Rougés, departamento Monteros; tanto en la constancia de inscripción de AFIP como en la receta agronómica del 8-9-2023 se consigna el domicilio de Vieja Arcadia.

* **Labores y Trabajos del Sur S.A.**, CUIT 30-71093837-3, con domicilio en Sargento Juárez s/n, León Rougés, CP 4143, Tucumán.

III. A TODO EVENTO INTEGRACIÓN DE LA LITIS

Al solo efecto de ejercitar la totalidad de las defensas en atención al principio de eventualidad procesal (Título preliminar, principio XVI, ley 9.531), para el improbable supuesto de que no se admita la ampliación de la demanda en su faz pasiva, corresponde que en los términos que prevé el art. 53 del CPC y C se ordene la citación de María Verónica Estofan, Agropecuaria Don Eduardo S.A. (en formación) y de Labores y Trabajos del Sur S.A., dado que la integración de la litis se impone como necesaria a fin de posibilitar el dictado de una sentencia útil, en vista de la inescindible vinculación de los mencionados sujetos con el conflicto ambiental en discusión.

El mentado precepto de la ley adjetiva establece que:

*“Integración de la Litis. **Cuando de los términos de la demanda o de la contestación resultase que no podrá dictarse sentencia útilmente sin la citación de todos los interesados en la relación sustancial, el juez deberá**, de oficio o petición de parte, hasta antes del dictado de la providencia del Artículo 443, **ordenar la integración de la litis**. Si esta situación fuera advertida después de la apertura a prueba, el juez anulará lo actuado a partir*

de la misma y mandará integrar la litis como corresponda.”

La Corte Federal, en consolidada doctrina, admitió la intervención de terceros en el amparo, cuando resulta necesaria para la integración de la litis, lo que ocurre cuando existe “comunidad de controversia” con las partes originarias, poniéndose en cabeza del tercero la demostración de tales extremos, quien además debe tener un interés directo en el litigio, de manera tal que la sentencia que se dicte le resulte de algún modo obligatoria, es decir, que se vea alcanzado por ella (CSJN, “**Zofracor S.A. c/ Estado Nacional s/ Amparo**”, 14-12-1999, Fallos: 322:3122; “**Atilio, Alfredo Siutti c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ Amparo**”, 11-4-1995, Fallos: 318:539; “**Capelli, Rubén José y otros c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/Amparo**”, 9-8-2001, Fallos: 324:2117).⁷

IV. OFRECEMOS PRUEBA

Ofrecemos la prueba que a continuación se enuncia:

A. INSTRUMENTAL

1. Las constancias de autos, en especial:

1.1. El informe art. 21 CPC presentado por Silvio Sotillo el 17-1-2023 y la instrumental allí mencionada y adjuntada en fechas 17-10-2023 (horas 22:43) y 18-10-2023 (horas 09:58).

1.1.1. Escritura pública n° 68 CONVENIO DECLARATIVO, pasada el 7-6-2022, ante el escribano Miguel Ángel Yapur Fernández, titular del registro n° 96.

1.1.2. Receta agronómica del 8-9-2023.

1.1.3. Factura A Agroempresa Semillas S.A.

1.1.4. Escritura pública n° 72 CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS POSESORIOS Y LITIGIOSOS SOBRE INMUEBLE, pasada el 8-6-2022, ante el escribano Miguel Ángel Yapur Fernández, titular del registro 96.

1.1.5. Croquis.

1.1.6. Escritura pública n° 134 del 30-11-2020, Registro N° 96. Se oficie al

⁷ MORENO, Guillermina. (2015). “*La intervención de terceros en el amparo: comunidad de controversias y afectación de derechos*”. Prudentia Iuris, 79, págs. 185-196. Biblioteca digital de la Universidad Católica Argentina.

Registro Notarial a fin de que remita copia autenticada del testimonio de ese instrumento.

1.2. El escrito titulado “Contesta Informe Art. 21 Ley 6.944” de Temas Industriales S.A. y Bioenergía Santa Rosa S.A. de fecha 17-10-2023 y la documentación allí acompañada en especial:

1.2.1. Escritura n° 71, de fecha 8-6-2022, registro 96.

B. INFORMATIVA

1. Se libre oficio a la **Dirección de Personas Jurídicas** a fin de que:

i) En relación a la firma Agropecuaria Don Eduardo S.A. (en formación), CUIT 33-71699271-9, informe si ha concluido su constitución definitiva y remita copia autenticada del contrato constitutivo y sus modificaciones.

ii) Remita copia autenticada del contrato constitutivo y sus modificaciones de la sociedad Labores y Trabajos del Sur S.A. CUIT 30-71093837-3.

2. Se oficie digitalmente a la **A.F.I.P. – Delegación Tucumán**, para que por intermedio de quién corresponda informe:

i) Si la señora María Verónica Estofan, DNI 26.109.616, CUIT 27-26109616-7, figura o figuró alguna vez inscripta como empleadora. En caso afirmativo, indique fecha de inscripción, actividad y domicilio legal denunciado.

ii) Agropecuaria Don Eduardo S.A. (en formación), CUIT 33-71699271-9, con domicilio en Ruta 38 KM 740 0 - Lote/KM: sobre Ruta 38 Vieja Arcadia, 4147, Tucumán. figura o figuró alguna vez inscripta como empleadora. En caso afirmativo, indique fecha de inscripción, actividad y domicilio legal denunciado.

3. Se oficie a la **Dirección de Agricultura de la Provincia de Tucumán** a fin de que informe:

3.1. Si en cumplimiento de la normativa aplicable en materia de plaguicidas (ley 6291/91, Decreto 299/96 y Resolución N° 10/2013) las firmas **Agropecuaria Don Eduardo S.A.** CUIT 33-71699271-9, con domicilio en Ruta 38 KM 740 0 - Lote/KM: sobre Ruta 38 Vieja Arcadia, 4147, Tucumán y **Labores y Trabajos del Sur S.A.** CUIT 30-71093837-3, con domicilio en Sargento Juárez s/n, León Rougés, Tucumán:

i) Estuvieron inscriptas en el Registro Provincial de Agroquímicos, durante el período 2022 y hasta qué fecha se extendió la validez. Remita copia de la documentación que acredite la inscripción.

ii) Se encuentran inscriptas en el Registro Provincial de Agroquímicos para el período 2023 y la fecha hasta la que se extiende su validez. Remita copia de la documentación que acredite la inscripción.

iii) Indique los agroquímicos inscriptos por las mencionadas sociedades para los períodos de habilitación 2022 y 2023, con sus respectivos números de registros. Remita copia de la documentación que acredite las inscripciones.

iv) Señale las categorías de aplicación en que fueron inscriptas ambas sociedades para los períodos de habilitación 2022 y 2023 respectivamente.

3.2. Si se autorizó a las firmas Agropecuaria Don Eduardo S.A. y/o Labores y Trabajos del Sur S.A. a realizar, a través de empresas aéreas dedicadas a la aplicación de agroquímicos habilitadas, fumigaciones aéreas los días 19-4-2023 y 21-4-2023 en fundos de caña de azúcar ubicados en la Comuna de Amberes, Departamento Monteros, que limitan hacia el este con la nueva traza de la Ruta Nacional 1V38, al norte con la población de León Rougés y Comuna de Huasa Pampa, al sur con el camino vecinal “camino de la suerte” y al oeste con la vieja traza RN38. Señale las personas físicas y/o jurídicas habilitadas.

3.3. Si obra registro en esa Dirección de pedidos de autorización de fumigaciones aéreas llevadas a cabo los días 19-4-2023 y 21-4-2023 respectivamente en fundos de caña de azúcar situadas en la Comuna de Amberes, Departamento Monteros, que limitan hacia el este con la nueva traza de la Ruta Nacional 1V38, al norte con la población de León Rougés y comuna de Huasa Pampa, al sur con el camino vecinal “camino de la suerte” y al oeste con la vieja traza RN38. Señale las personas físicas y/o jurídicas habilitadas.

4. Se oficie al **Registro Automotor Seccional N° 3**, con domicilio en calle Gral. Paz 1183 PISO, a fin de que informe si la titularidad del vehículo HILUX DOMINIO AF368JR, corresponde a María Verónica Estofan DNI 26.109.616, CUIT 27-26109616-7 y/o Agropecuaria Don Eduardo S.A. (en formación) CUIT 33-71699271-9 y/o Silvio Sotillo DNI 22.397.031, CUIT 20-22397031-2.

C. ABSOLUCIÓN DE POSICIONES

Solicitamos que se cite a absolver posiciones a:

i) María Verónica Estofan, DNI 22.397.031, CUIT 20-22397031-2, con domicilio en casa n° 9, Barrio La Corona de la ciudad de Concepción, Departamento Chicligasta, Tucumán.

ii) José María Estofan, DNI 31.267.379DNI, presidente de la firma Labores y Trabajos del Sur S.A. CUIT 30-71093837-3, debiendo ser notificado en la sede de dicha firma sita en Sargento Juárez s/n, León Rougés, Departamento Monteros, Tucumán.

Pedimos que se fije día y hora para que nuestra parte presente por Secretaría los Pliegos de Posiciones en sobres cerrados a cuyo tenor deberán responder las personas absolventes en su oportunidad.

V. RESERVAMOS RECURSO EXTRAORDINARIO

Una hipotética decisión que, agotadas las instancias locales, desestimare el presente amparo ambiental, compurgaría la flagrante violación de nuestros derechos fundamentales a vivir en un ambiente sano (arts. 41 CN; 11 Protocolo de San Salvador), a la vida y a la integridad personal (arts. 4.1 y 5.1 CADH), a la salud (art. 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de jerarquía constitucional, art. 75 inc. 22 CN), a la alimentación adecuada, (art. 11, PIDESC), al agua y a trabajar y ejercer industria lícita (art. 14, Ley Suprema); y no constituiría una derivación razonable y justa del derecho vigente, ni de los hechos de la causa.

Reservamos, para ese improbable evento, la apelación extraordinaria que autoriza el artículo 14 de la ley 48.

VI. PETITORIO


Por lo expuesto a V.S. pedimos que:

1. Tenga por ampliada la demanda en su faz pasiva.
2. Tenga por ofrecida prueba.
3. Fije día y hora para concurrir a esa Unidad Judicial a presentar los Pliegos de Posiciones en sobres cerrados.
4. Haga lugar a la MEDIDA CAUTELAR impetrada en el escrito inicial.
5. Cumplidos los requisitos de ley, oportunamente haga lugar a la acción de

amparo instaurada, con costas.

Resolviendo de conformidad

HARÁ JUSTICIA


Ezequiel Elias
González
34160155


Maria Eugenia
Sesto Cabral
26685498

CONTESTAMOS DEFENSAS PREVIAS

JUICIO: “SESTO CABRAL MARÍA EUGENIA Y GONZÁLEZ EXEQUIEL ELÍAS c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OTROS s/ AMPARO AMBIENTAL” Expte. N° 149/23

Señora Jueza Civil y Comercial Común

María Eugenia Sesto Cabral y Exequiel Elías González, amparistas en autos, con el patrocinio letrado de **Adriana García Romano**, a V.S. respetuosamente decimos:

I. OBJETO

Aunque en virtud de lo previsto en el artículo 18 del CPC, no pueden articularse defensas previas, de ser admitida su presentación sin que se les confiera un trámite separado y preliminar, nos damos por notificados de las excepciones opuestas por la contraparte junto con el informe del artículo 21 de la ley 6.944 y las contestamos, solicitando su rechazo.

II. EN CUANTO A LA ADUCIDA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA

Tanto Silvio Sotillo como las firmas demandadas en tanto administradoras del Ingenio Santa Rosa, Temas Industriales S.A. y Bioenergía Santa Rosa S.A., opusieron defensa de falta de legitimación activa.

Al respecto y en respuesta a los endeble argumentos aducidos por la contraria, nos remitimos a los profusos fundamentos vertidos en el escrito inicial de fecha 28-8-2023, en el capítulo titulado **II. LEGITIMACIÓN ACTIVA** (páginas 2-10) donde, con base en el plexo normativo constitucional y legal allí reseñado (artículos 43 de la Constitución Nacional, 30 de la Ley General del Ambiente; 8 numeral 3 inciso c del Acuerdo de Escazú; 37 y 41 de la Constitución de Tucumán; 7 de la ley 6.944 y 14 de la ley 6.253), doctrina y jurisprudencia destacadas en la materia, dejamos sentado que nos hallamos plenamente habilitados para incoar la acción aquí instaurada en calidad de personas afectadas por las fumigaciones con agroquímicos denunciadas.

Asimismo reenviamos al apartado siguiente de la demanda denominado **III. PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 78 DE LA LEY 6.944** (páginas 10-13), en el que, a tenor de lo postulado en el punto sobre nuestra legitimación para accionar, articulamos la invalidez del primer párrafo del citado precepto, con sólido apoyo en calificada doctrina (**HAEL** Juan Inés - **PERAL** Juan Carlos, “*Código Procesal Constitucional de Tucumán*,

concordado, comentado y anotado, Ley 6.944”, Bibliotex, S. M. de Tucumán, 2012, p. 349) y en fallos de nuestros tribunales locales (Cámara en lo Contencioso Administrativo - Sala 3, s/ Amparo, sentencia 24 del 10-3-2003, Registro: 00014245-01; y en forma reciente el mismo tribunal Sala 1, s/ Amparo, Expte. 478/21, sentencia 253 del 5-4-2022, Registro: 00066117-02).

III. EN RELACIÓN A LA ALEGADA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA

El coaccionado Silvio Sotillo y las sociedades que administran el Ingenio Santa Rosa, han manifestado en sus escritos del 17-10-2023 que no son titulares dominiales ni explotadores de los fundos fumigados.

1. El demandado Sotillo:

i) Luego de reconocer que está casado con María Verónica Estofan, manifiesta que ella “...es **propietaria de algunos de los inmuebles** que rodean al de la actora, conforme pacto vigente por escritura 134 del 30 de Noviembre de 2020, Registro N° 96. Estos inmuebles son **explotados por Agropecuaria Don Eduardo S.A.**...” empresa de la cual su esposa es presidenta y él sería **asesor técnico** (artículo 31, LGA). El instrumento (escritura 134) no fue adjuntado.

ii) Acompaña copia de la escritura pública n° 68 de fecha 7-6-2022 (registro n° 96), que instrumenta el convenio declarativo de su desvinculación de Temas Industriales S.A. y de **Labores y Servicios del Sur S.A. (LyTSSA)**, CUIT 30-71093837-3, **de la que el propio Sotillo fue presidente** renunciado el 31-5-2022; cargo asumido por José María Estofan que interviene en el acto como presidente de ambas empresas Temas Industriales S.A. y Labores y Servicios del Sur S.A..

Respecto a esas empresas señala que Temas Industriales S.A. “... , hasta junio del año 2022 al menos, estaba a cargo de explotar la molienda de caña de azúcar para la producción de azúcar. **La segunda [Labores y Trabajos del Sur S.A.] fue, hasta junio del año 2022, quien llevaba adelante la explotación de los fundos cañeros siendo proveedor de la fábrica Ingenio Santa Rosa.** Bioenergía Santa Rosa SA tiene otra actividad, vinculada a la producción de alcohol de la cual soy ajeno.”

iii) En cuanto a las parcelas de caña de azúcar que fueron fumigadas en forma aérea el 19-4-2023 y el día 21-4-2023, afirma que **no se vinculan a Verónica Estofan ni ADESA**, omitiendo mencionar quién las explota dado que de los datos obtenidos son del Ingenio Santa Rosa, cuyo arrendatario sería Sotillo.

2. Por su lado el apoderado de Temas Industriales S.A. y Bioenergía Santa Rosa S.A., convocadas al proceso en tanto administradoras del Ingenio Santa Rosa:

i) Aduce que “los fundos señalados por los actores **no pertenecen ni son arrendados por ninguno de mis mandantes. Los mismos pertenecen desde Junio de 2022 a la Sra. María Verónica Estofán, por cesión de acciones y derechos de dominio y posesión efectuada mediante escritura n° 71, autorizada por el registro notarial n° 96 en fecha 8/6/2022, cuya copia se adjunta al presente.” De dicho instrumento surge que María Verónica Estofan cedente de las cuotas sociales de Los Sauces S.R.L. a la cesionaria **Temas Industriales S.A.**, representada por su presidente **José María Estofan**, recibe en pago de esas cuotas sociales **un inmueble ubicado en Amberes, Monteros, Parcelas 1,2,3 y 4, compuesto de los padrones 4269-42270-42271-46834, dominio inscripto en Matrícula M-07746.****

En la escritura se aclara puntualmente que “...[l]a inscripción del inmueble descrito en el registro inmobiliario **se encuentra pendiente debido a la falta de plano de mensura o actualización parcelaria**, situación que la adquirente conoce y acepta...”.

Advierta V.S. que el contrato de compraventa de adquisición del inmueble donde vivimos las personas aquí amparista fue celebrado por el suscripto en fecha 25-8-2021, es decir con anterioridad a la escritura n° 71 del 8-6-2022 de cesión a María Verónica Estofan.

ii) Se omiten explícitamente toda manifestación relativa a las fracciones de caña de azúcar fumigadas de manera aérea que en base a la información colectada son propiedad y/o están siendo explotadas a cualquier por el Ingenio Santa Rosa y/o Silvio Sotillo.

iii) Al ofrecer prueba documental mencionan a la firma **Labores y Trabajos del Sur S.A.** CUIT 30-71093837-3 del siguiente modo: “... *a fin de visibilizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales adjunto documentación perteneciente a mis mandantes y a **Labores y Trabajos del Sur, sociedad que explota sus fundos***”.

Aunque resulta sumamente dificultoso identificar a las personas humanas y/o jurídicas dueñas y/o explotadoras de los fundos rurales linderos a nuestra vivienda familiar - datos que no obran en el Registro Inmobiliario- en los que se realizaron las 14 fumigaciones denunciadas por nuestra parte, hemos aportado un cúmulo de prueba documental y la producida en sede penal en pos de señalar a los particulares responsables de los actos lesivos.

Así:

* En el video 20221029 – 181738 de la fumigación del día 29-10.2022, el

trabajador rural aplicador, al ser consultado por la aquí amparista acerca del nombre de la empresa para la cual trabaja dice que es el Ingenio Santa Rosa (segundos 23 y 24).

* En el video 6 de la fumigación del 16-11-2022, el conductor de la camioneta Toyota Hilux blanca Dominio N° AF 368 JR, que se identificó con el apellido González manifiesta que lo mandan del Ingenio Santa Rosa (en el minuto 1 segundo 48 del video 6) y que el dueño es Silvio Sotillo (minuto 2 segundo 3 del video 6; reiterándolo en el minuto 3 segundo 34 de esa grabación). También estaba presente en el lugar, quien se presentó como el encargado del ingenio identificándose bajo el apodo de “Gringo” apellidado Arnedo (minuto 2 segundo 8 del video 6).

No se trata de simples dichos, como sostienen con ligereza las firmas coaccionadas, sino de manifestaciones de los propios trabajadores rurales que, al momento de realizar la tarea de aplicación de agroquímicos que les fue encomendada -llevada a cabo sin contar con Elementos de Protección Personal-, y ser consultados acerca de quiénes eran sus empleadores, respondieron de manera creíble, coherente y coincidente, traduciendo con sencillez su conocimiento personal y señalando sin titubeo a las personas -ingeniero Sotillo y el Ingenio Santa Rosa- para las que trabajan. Esos datos aportados in situ, constituyen un elemento de prueba relevante por el tipo de actividad en debate.

* En la decisión de fecha 30-5-2023 recaída en los Legajos M-000948/2023, M-000949/2023, M-000951/2023, M-000953/2023 y M-000954/2023, se consigna que de la información sumaria dispuesta en fecha 5-3-2023, a fin de determinar quiénes son los propietarios y/o arrendatarios de los fundos colindantes, arrojó como resultado que “los terrenos serían de propiedad de la familia Estofan siendo su arrendatario el ciudadano Sotillo”.

También demostramos las relaciones de parentesco existentes entre las personas demandadas, como quedó plasmado en el capítulo VI. del escrito inicial (páginas 62-65), donde se demostró que el ingeniero Silvio Sotillo está casado con María Verónica Estofan, que a su vez es hermana de José María Estofan, presidente de Temas Industriales S.A. y de Labores y Servicios del Sur S.A. -empresa que es mencionada por la accionada en ambos escritos de responde- Gustavo Eduardo Estofan, director titular y presidente de Bioenergía Santa Rosa S.A. y apoderado general de Temas Industriales S.A., firmas que administran el Ingenio Santa Rosa.

De lo expuesto surge que la legitimación pasiva está acreditada en estos actuados.

IV. EXISTENCIA DE ACTOS LESIVOS ACTUALES E INMINENTES Y DE ILEGALIDAD MANIFIESTA

Tanto el ingeniero Silvio Sotillo como las firmas Temas Industriales S.A. y Bioenergía Santa Rosa S.A., han postulado que no resulta viable el amparo deducido por la no configuración en el sub examine de actos lesivos y obrar arbitrario o ilegal de su parte.

El coaccionado Sotillo, bajo el título “2- *Inadmisibilidad de la vía*”, aduce genéricamente que el cúmulo de afecciones por nosotros invocado con cada exposición a las pulverizaciones denunciadas, no sería “consecuencia necesaria” de la actividad, y que no habríamos probado los daños a la salud alegados.

Paradójicamente sus pretendidos argumentos adolecen de prueba que acredite que los plaguicidas cuya aplicación dispone y supervisa en condición de asesor técnico -según él mismo reconoce- de la firma Agropecuaria Don Eduardo S.A. de la que su esposa sería presidenta, y que es la empresa que estaría explotando los fundos linderos a nuestra vivienda familiar, ***no revisten peligro para la salud humana, animal y vegetal.***

En este punto téngase presente que en los conflictos ambientales, la situación de asimetría y desigualdad normalmente existente entre las partes que se enfrentan (en el sub lite las personas aquí amparistas vecinas de los campos fumigados y víctimas de la contaminación contra un grupo empresario poderoso desde el punto de vista económico), es compensada con la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que asigna la tarea de demostración a aquella parte que, por su mayor manejo o acceso a la información, facilidad o eficiencia operativa, esté en mejor situación o tenga menos inconvenientes para hacerlo¹. En ese sentido el artículo 8 numeral 3 inciso e) del Acuerdo de Escazú, contempla entre las medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba.

Por su lado las sociedades demandadas en el capítulo de su escrito del 17-10-2023 “VII. *Improcedencia de la acción de Amparo*”, con base en la norma del art. 50 del CPC, aseveran, entre otras cuestiones, que:

* “..., *la extensa argumentación del planteo, el cual ocupa 200 hojas,*

¹ CATALANO Mariana, “*Prueba ambiental y teoría de la prueba*”, RDAmb 55, 28/09/2018, 89, Cita Online: AR/DOC/3405/2018.

evidencia que en el presente caso no existe una amenaza de violar con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos, libertades o garantías constitucionales, sino que ha traído a colación un debate de índole mundial respecto de los agroquímicos y su consideración sobre la posibilidad de que estos sean nocivos para la salud y el ambiente...”

** “El presente amparo se asemeja más a una exposición de motivos de proyecto de ley que a una enunciación de **supuestos daños actuales o futuros y una pretensión concreta.**”*

** “Los actores **amplifican la percepción riesgos hipotéticos teorizando acerca de los mismos** de manera descontextualizada.”*

En contraposición a ello, y conforme emana del escrito inicial, de su ampliación y la profusa prueba documental adjuntada, en autos concurren los presupuestos de admisibilidad de la vía elegida al haberse demostrado las graves afectaciones a la salud padecidas efectivamente como consecuencia de las pulverizaciones denunciadas, llevadas a cabo en franca violación de la ley 6.291 y su reglamentación, y el riesgo permanente al que continuamos expuestos.

1. Actos lesivos actuales e inminentes

En **todas** las denuncias formuladas en sede policial relativas a las 14 fumigaciones -11 terrestres y 3 aéreas- practicadas a cero y escasos metros de distancia de nuestra residencia, hemos individualizado los síntomas padecidos, reconocibles fácilmente por la aquí amparista en su condición de farmacéutica y licenciada en química:

* **Fumigación terrestre del 29-10-2022**: durante dos días la vivienda permaneció impregnada del olor a agroquímicos, produciéndonos **náuseas y cefaleas persistentes**, y otros síntomas como **dificultad respiratoria grave, catarro y expulsión de flemas y mucosidades, ardor en los ojos, dificultad al orinar, ardor de vías urinarias y coloración rojiza intensa en orina, cefaleas, mareos, y visión borrosa.**

* **Fumigación terrestre del 16-11-2022**: con las particularidades expuestas en el escrito inicial al relatar esa pulverización. Los síntomas sufridos por la aquí amparista fueron consignados en el informe 138/2022 del médico forense: **episodios reiterados de vómitos, náuseas y diarrea acompañándose de dificultad respiratoria y episodios de pérdida del equilibrio posicionales.**

* **Fumigación terrestre del 9-1-2023**: realizada en el campo de soja a cero metros de distancia de nuestro terreno. Síntomas: **cefalea, diarrea persistente, ardor en la**

garganta, dificultad respiratoria, congestión nasal, oídos tapados, dolor y ardor en la micción y un fuerte y penetrante olor a solvente orgánico o similar, que irritó fosas nasales y vías respiratorias altas.

* Fumigaciones del miércoles 11-1-2023: i) A horas 0:30 y 1:00: en la parcela de caña de azúcar a cero metros de distancia de nuestro fundo. Síntomas: **molestias en la garganta, fuerte ardor en las fosas nasales y conjuntivas oculares, cefalea persistente e intensa durante varios días, inflamación de vías aéreas altas, teniendo que recurrir a la administración de corticoides para evitar el edema de glotis. Percepción de olor fortísimo a solvente irritante, persistente durante varias horas luego de la fumigación.** ii) A horas 6:55 y 7:50: en el campo de soja distante a 100 metros de nuestra propiedad. En todo momento los volátiles de olor a agroquímico fueron perceptibles y la **inflamación a nivel de la garganta** se hizo palpable durante la aspersión. Otros signos detectados: **cefalea intensa, diarrea persistente, ardor en la garganta, dificultad respiratoria, congestión nasal, oídos tapados, dolor y ardor en la micción y un fuerte y penetrante volátil de olor a solvente orgánico o similar, que irritó fosas nasales y vías respiratorias altas la administración de corticoides.** iii) A horas 16:00: en parcelas de caña de azúcar distantes a 50 metros de nuestra propiedad. Síntomas: **molestias e irritación en la garganta, fuerte ardor en las fosas nasales y conjuntivas oculares, cefalea persistente.** Continuación del tratamiento con corticoides, ya que fundamentalmente prevalecían síntomas de irritación de vías aéreas altas, ronquera, tos seca, inflamación de tráquea, inflamación de glándulas parótidas y endurecimiento palpables al tacto, que también provocaban la sensación de oídos tapados por la cercanía anatómica.

* Fumigaciones del 21, 22 y 23 de enero: en la parcela sembrada con caña de azúcar a 65 metros de distancia. Síntomas: **molestias en la garganta, fuerte ardor en las fosas nasales y conjuntivas oculares, cefalea persistente e intensa, inflamación de vías aéreas altas, teniendo que recurrir a la administración de corticoides para evitar el edema de glotis.** Con las elevadas temperaturas de la mañana del sábado, cuando salimos a recorrer la zona para medir la distancia, el olor era intenso y penetrante y la humedad elevada no hacía más que empeorar la situación.

* Fumigación aérea del 19-4-2023: en el campo de caña de azúcar a 500 metros de nuestra propiedad. El equipo cargado sobrevoló en nuestro espacio aéreo a 40 metros de altura. Inmediatamente después de ocurrido el evento los síntomas percibidos fueron **molestias en la garganta y un fortísimo olor que tornaba dificultosa la respiración.**

* Dos fumigaciones aéreas el día 21-4-2023 a horas 11:00 y 14: El mismo fundo que la anterior. La avioneta voló por encima de nuestra casa a menos de 40 metros de

altura utilizando toda la extensión de nuestro terreno para maniobrar y cambiar de dirección y retornar a las parcelas asperjadas. Percibimos un **olor a solvente fuerte, ardor intensísimo en los ojos**. Registramos **dolor y molestias en la garganta**. Ese mismo día la amparista se dirigió al CAPS de Amberes, ubicado a 7 km de su casa, sin poder ser atendida porque estaba cerrado. También comenzó a detectar **falta de aire y dificultad respiratoria creciente**.

Persistiendo el malestar, en fecha 25- 4-2023, acudió nuevamente al Centro de Atención Primaria de la Salud de Amberes Área Operativa Monteros SIPROSA, y fue examinada por el médico Andrés Torres Lanzavecchia (matrícula profesional 7596), que **constató el cuadro de intoxicación aguda por agroquímicos, prescribiendo medicación y reposo de 3 días**, conforme se acreditó con el certificado acompañado junto **con la prescripción de los fármacos para apaciguar los efectos provocados por las pulverizaciones**, a saber:

1) Loratadina (comprimido vía oral antialérgico), dos cada 24 horas por tres días.

2) Aerovial HFA budesónida 200 dosis (corticoides en aerosol para inhalación) 2 paff cada 8 horas de cinco a siete días.

3) Purpomicina, Tobramicina 0,3 % Dexametasona 0,1% Suspensión oftálmica estéril, una gota en cada mucosa ocular cada 8 horas durante tres días.

* **Fumigación terrestre del 21-9-2023**: campo con caña de azúcar distante a escasos 50 metros de nuestro inmueble. La aquí demandante se despertó repentinamente por una cefalea muy intensa que la aquejaba. Luego de no poder ser atendida en el CAPS de Amberes se dirigió al Hospital General Lamadrid Monteros, donde fue examinada por el Dr. Facundo Monteros (M.P. 10540), quien **constató el cuadro de intoxicación aguda que atravesaba procediendo de inmediato a apaciguar los síntomas**, conforme da cuenta el certificado que presentamos con el escrito datado el 27-9-2023, que reza:

“Paciente ingresa a guardia consultando por **cefalea intensa y taquicardia, PV:FC 120 demás parámetros vitales estables, se realizó 1 M diclofenac, dexametasona y diazepam, queda en observación durante una hora, es dada de alta con PV estable, paciente refiere que se realizó **fumigación al frente de su domicilio en el día de la fecha**.”**

A ello se añade el daño psicológico, acreditado con la constancia emitida el 13-4-2023 por la Lic. Mariana Pérez, Psicóloga clínica especialista en trastornos de ansiedad (M. 57060, Provincia de Buenos Aires) y la actual situación de desamparo que ***nos coloca***

nuevamente en un estado de alerta y preocupación permanentes, alterando de manera significativa nuestras condiciones de vida frente al riesgo de inminentes pulverizaciones con sustancias tóxicas.

Vinculado con lo expuesto, es dable resaltar que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, con el erudito voto del Dr. Juan Carlos Hitters, en el precedente "**D., J. E. F. Acción de amparo. Actor M., M. C. y otro**" (sentencia de fecha 8-8-2012), que guarda contornos fácticos similares a los del sub lite, pues se trataba de un matrimonio que por derecho propio y en representación de sus hijos menores, había deducido acción de amparo contra el propietario de una parcela lindante a la vivienda de los actores en la que se realizaban fumigaciones con agroquímicos, admitió la acción al tener por acreditados los efectos lesivos invocados:

*"..., respecto del grado de compromiso a la salud humana que pudieran derivarse de esta actividad, **adquieren significación los testimonios que dan cuenta de algunos síntomas que podrían tener vinculación con la actividad de fumigación denunciada.** Así, el testigo M. **declaró que luego de la fumigación sufrió picazón y ardor en los ojos, y que tales efectos cesaron recién luego de que tomara un baño** (fs. 163 vta.). En el mismo sentido, **el testigo S. manifestó haber padecido ardor en los ojos y sequedad en la boca** (fs. 159 vta.)."*

"Con relación a ello, la copia del informe obrante a fs. 63 suscripto por la doctora Ana María Girardelli, Directora del Servicio de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata (producido en los autos "D. V. , O. c.D. , A. s. amparo", que si bien no ha podido ser reproducido en las presentes atento la negativa del a quo, el mismo ha sido objeto de expresa valoración por el sentenciante de grado a fs. 422 y vta.), precisó con relación a estos productos que el químico utilizado "se absorbe por vía cutánea e inhalatoria", señalando su acción irritante sobre el cuerpo humano."

"Por otra parte, a fs. 177/189 luce informe producido por el Centro de Divulgación Científica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires suscrito por el médico Jorge Kaczewr, dando cuenta de los efectos de los agroquímicos como el glifosato en la salud humana, todo lo cual confiere un sentido corroborante a lo expresado en las citadas testimoniales..."

"vii. No puedo soslayar en este análisis, un dato que emerge de la realidad y que ha tenido reflejo normativo en la sanción del decreto del Poder Ejecutivo

nacional 21 del 16 de enero de 2009 (B.O. del 19-I-2009). Me refiero a la preocupación manifestada en el seno de la sociedad a partir de ciertos sucesos que afectaron a algunos sectores de la población presuntamente expuestos de manera continuada al contacto con productos agroquímicos.”

*“...En ese contexto reglamentario propiciado por la norma que acabo de referir, se dictó la Resolución 276/2010 del Ministerio de Salud (B.O. del 16-II-2010), que creó el "Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas", cuyos objetivos -entre otros enunciados en sus considerandos- son los de propender a la información, concientización y sensibilización continua y sostenida de la población en la materia, señalando que "... **las intoxicaciones por plaguicidas constituyen uno de los principales motivos de consulta a los CIAATs [Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica] del país**, y en consecuencia resulta necesario fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica a fin de obtener registros y monitorear a largo plazo sus impactos en la salud de la población"...*”

*“viii. Concluyo pues que en el sub discussio, los extremos fácticos acreditados vistos a la luz de las consideraciones jurídicas que anteceden tornan desacertadas las conclusiones del fallo en orden a la ausencia del recaudo de admisibilidad analizado, toda vez que **dichos elementos permiten inferir una probabilidad cierta de que se verifique la consecuencia lesiva que se pretende evitar con la acción intentada.**”*

Igualmente en la especie, hemos arrojado numerosos estudios científicos provenientes de universidades nacionales y de organismos estatales que demuestran la peligrosidad para la salud y el ambiente de los agroquímicos, que cuentan con la fuerza probatoria de los informes periciales de acuerdo al art. 33 de la LGA (Capítulo X. del escrito inicial, página 89 y ss.).

Los resultados allí arrojados son extrapolables plenamente al sub lite, por los motivos que sintetizamos a continuación, con soporte en los conocimientos de la suscripta, cuya formación académica y científica -Doctora en Química, licenciada en química y farmacéutica- se encuentra acreditada.

Empecemos con un ejemplo.

La prueba de seguridad de un producto o sustancia medicamentosa, es el

estudio en fase clínica 2, 3 y 4. Esos estudios consisten en el examen de los efectos positivos y negativos de una molécula en particular, los efectos a corto, mediano y largo plazo; y están regidos por las normativas del ente regulador, siendo necesarios consentimientos informados de las personas voluntarias, aprobación del protocolo de aplicación y seguimiento por un comité independiente de bioética integrado por médicos especialistas y un director de los ensayos que puede ser o bien un médico matriculado o un bioquímico matriculado.

Las pruebas clínicas en pacientes voluntarios, que prueban y probaron históricamente todas las vacunas y medicamentos, son obligatorias y consisten en la prueba última de seguridad.

Una prueba clínica de análisis (medición de signos vitales, análisis en muestras de orina, sangre, materia fecal para identificar metabolitos degradados de la molécula y/ o grupo de moléculas con actividad terapéutica) realizada en humanos, es extrapolable a la población en general. **Lo expuesto es un conocimiento básico y surge de la realidad, de que fisiológica, metabólica y estructuralmente, los seres humanos somos iguales, estemos en la China, Australia o Argentina. Sin esa certeza, ninguna persona diferente de quienes participaron en un estudio clínico para determinar la eficacia de un medicamento podría consumirlo con seguridad.**

Lo mismo sucede con las pruebas en humanos voluntarios en estudios de toxicidad subclínica, aguda y crónica.

En el caso puntual de los agroquímicos, estamos en presencia de moléculas cuyo comportamiento es idéntico independientemente del lugar geográfico donde residan las personas expuestas. Una molécula en particular como por ejemplo el órgano clorado; ácido 2,4 dicloro fenoxiacético (2,4-D) en contacto con el cuerpo de humano, tiene el mismo efecto nocivo para las células de un humano en Salta, en Misiones, Buenos Aires o en Tucumán. La acción disruptora endocrina (la disrupción endocrina deriva en cuadros diabéticos, arterosclerosis, enfermedades degenerativas, hipo e hipertiroidismo y tumores cancerígenos) los efectos teratogénicos (malformaciones congénitas, labio leporino, disfunciones cognitivas) que produce la exposición a este agrotóxico se debe al mero mecanismo de acción de la molécula 2, 4 diclorofenoxiacético. Potencia su toxicidad ya letal, el metabolito derivado del proceso de síntesis química durante la producción, la DIOXINA que se encuentra presente junto con los hidrocarburos coadyuvantes también tóxicos en el tanque de fumigación.

En vista de ello, no cabe duda que los informes médicos y científicos arrojados por nuestra parte constituyen prueba suficiente que demuestra los efectos nocivos

de los plaguicidas, y así los han considerado los numerosos fallos judiciales en la materia que hemos citado en el escrito promotor de la demanda y a los que nos remitimos, que han fundado sus decisiones en ese sólido soporte técnico-científico.

2. Ilegalidad manifiesta

En el capítulo **VIII. LOS ACTOS LESIVOS DE PARTICULARES: FUMIGACIONES TERRESTRES y AÉREAS CON AGROQUÍMICOS VIOLATORIAS DE LA LEY 6.059 Y SU REGLAMENTACIÓN** del escrito promotor de la demanda (páginas 68-78), efectuamos un pormenorizado análisis -al cual nos remitimos- acerca de la palmaria violación a la ley 6.291 y su reglamentación en que incurrió la accionada.

Simplemente dejamos aquí sentado que: en el punto **1. Flagrante inobservancia del art. 7, 2º parte del Decreto 299/96** del referido apartado (VIII) enunciamos cada uno de los incisos (a, c, f, i, j) de dicho precepto, que fueron inobservados en las fumigaciones terrestres y en el caso de las aplicaciones aéreas, pusimos de manifiesto la vulneración del inciso b), al haberse operado en tres oportunidades a una distancia menor a los 2000 metros de la Comuna de Amberes² a cuya jurisdicción pertenece la zona residencial donde se encuentra nuestra vivienda -como emana del contrato de compraventa de fecha 25-8-2021- sobrevolando además después de las descargas por el CAPS, la escuela y la propia sede comunal; y en el punto **2. Otros graves incumplimientos de medidas de seguridad**, evidenciamos el incumplimiento de las condiciones básicas de seguridad para garantizar la protección de los operarios aplicadores de los agroquímicos, tal como quedó registrado en los documentos audiovisuales ofrecidos en los que se observa que los trabajadores no contaban con Elementos de Protección Personal adecuados a las características toxicológicas de los productos pulverizados (art. 13, ley 6.291, art. 12, Decreto 299/96).

V. IDONEIDAD DE LA VÍA INTENTADA

En sendos escritos presentados el 17-10-2023 la accionada arguye que el amparo ambiental de referencia no constituiría la vía idónea porque “excede ampliamente el marco y finalidad de la vía procesal utilizada”.

² Por ley provincial 4.671 (texto consolidado), fueron fijadas las jurisdicciones comunales en los distintos Departamentos. Así, conforme lo establece el art. 1 de dicha normativa, respecto del Departamento Monteros, entre las comunas rurales identificadas se encuentra consignada en el punto 7. la Comuna Rural de Amberes, respecto de la cual se señalan los siguientes límites: Norte: Por el camino a Huasa Pampa. Sur: Por el Río Seco. Este: Por el camino vecinal que es límite con el Municipio de Simoca, desde la propiedad de Sucesión P. Chazarreta, pasando por P. Bazán y hasta Segundo Bazán, quedando éstas dentro de la jurisdicción. Oeste: Por el camino a Finca Los Agudo, desde la propiedad de Miguel A. Hael y otros, hasta el Río Seco.

Contrariamente a ello veremos que en los asuntos ambientales como el que aquí se plantea, la aducida complejidad técnica o amplitud del debate no pueden erigirse como óbice para la tutela judicial efectiva, cuando se ha demostrado el daño a la salud y el alto riesgo de nuevas afectaciones frente a pulverizaciones con plaguicidas tóxicos y contaminantes del ambiente que se repiten en cada campaña agrícola y la ilegalidad manifiesta con la que está teñida la conducta de la parte demandada.

Surge de la demanda que, con soporte jurídico en los arts. 41 de la CN, 11 del Protocolo adicional a la CADH, 41 de la Constitución de Tucumán y 43 de la CN, 37 de la Carta Magna local y 30 de la ley general del ambiente, hemos promovimos la presente acción de amparo ambiental con el fin de solicitar el **cese inmediato** de fumigaciones terrestres a menos de 1000 metros del perímetro de nuestra propiedad y vivienda familiar y fumigaciones aéreas a menos de 2000 metros (cf. art. 7, inciso b, Dec. 299/96) para de ese modo **evitar la continuación y agravamiento del proceso de daño ya iniciado** por las pulverizaciones oportunamente denunciadas con plaguicidas altamente tóxicos y contaminantes del ambiente.

El bloque normativo ambiental invocado habilita plenamente la vía intentada.

Al respecto José Alberto Esain³ señala que **cuando la violación es manifiesta, y además necesita de una urgente solución** para restablecer la indemnidad del ambiente dañado, el proceso más adecuado será el de naturaleza constitucional. Allí es donde aparece el amparo como medio de protección inmediato y eficaz del derecho de naturaleza constitucional evidentemente violado con base en el art. 43 de la CN.

Estamos frente a un proceso que tiene por objeto la protección expedita del derecho humano fundamental particularizado a vivir en un ambiente sano y equilibrado (art. 41 CN). Esto nos llevará a hablar de proceso constitucional ambiental, o amparo ambiental, con sus características bien determinadas pues no será cualquier tipo de amparo, dado que debe abreviar en los principios de esa disciplina y los elementos que trae la ley 25.675.

Reforzando lo anterior el mentado autor enfatiza que *“...el amparo ambiental tiene base en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional. Pero además de esa norma la acción ha sido “integrada” por las nuevas disposiciones de la ley 25.675 General del Ambiente. Allí expresamente en el tercer párrafo del artículo 30 se ha reglado una especie específica de acción por cese del daño ambiental dentro de la vía procesal amparística.”*

³ “El amparo ambiental, su fórmula legitimatoria frente a las diferentes acciones derivadas del daño ambiental de incidencia colectiva ¿el desembarco de la acción popular ambiental?”, publicado en Doctrina Judicial, año XXII, nro. 18, fechada el 3.5.06, pp. 1.

En efecto el art. 30 tercer párrafo reza: *“Toda persona podrá solicitar mediante **acción de amparo la cesación de actividad generadora de daño ambiental colectivo**”.*

Néstor Cafferatta⁴ al analizar la cuestión, pone de resalto que la Corte Federal revalorizó el amparo como medio eficaz y efectivo de la tutela del ambiente, en el conocido precedente **“Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T’Oi c/ Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”** (sentencia de fecha 11-7-2002; Fallos 325:1744), donde dijo que *“..., **constituye un exceso de rigor formal sostener que las cuestiones requerían mayor debate y prueba, pues, a fin de determinar la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, resultaba suficiente controlar que los actos impugnados hubieran respetado los procedimientos exigidos por la legislación provincial y nacional vigentes para autorizar la actividad**. A tal fin, bastaba con examinar si, de conformidad con las normas invocadas por la actora, la autorización y prórroga de la actividad en cuestión requería una evaluación previa de impacto ambiental y social, y si se había respetado lo dispuesto por el art. 75, inc. 17, de la Constitución Nacional.”* (considerando 5º)

En idéntica senda Aníbal J. Falbo⁵, destaca el carácter indiscutible de la acción de amparo ambiental, en tanto vía judicial rápida, expedita, urgente; como una de las más idóneas para resolver con eficacia conflictos de tipo ambiental. Y citando el mentado precedente del tribunal cimero de la nación, señala que en esa misma línea, jueces y tribunales de todo el país han aceptado como vía idónea el proceso de amparo para defender el ambiente.

Efectivamente se ha considerado que *“... **la mayor amplitud de debate no es obstáculo para el amparo ambiental**, y sin que ello en el caso sub examen pueda ser óbice para el acceso a la jurisdicción (art. 33 de la C.N.; 8.1 y 25 de la CADH y específicamente, el propio art. 30 de la LGA que establece “El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie”).”* (Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A, **“Ulla, Laura y otros c/ Fidela Delia Ribas y Eduardo Ramón Ribas S.H. y otro s/ Amparo Ambiental”** Expte. 42129/2014, sentencia del 1-4-2015).

En materia de fumigaciones, entre muchos otros precedentes referenciados

⁴ “Introducción al derecho ambiental”, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Instituto Nacional de Ecología (INE) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2004, ps. 43-44.

⁵ “Derecho Ambiental”, Librería Editora Platense, La Plata, 2009, ps. 260-261.

en el escrito promotor de la demanda, en el emblemático fallo “San Jorge”⁶, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, entendió:

*“Que a su vez y desde otro vértice, **insiste la recurrente que atento la importancia y trascendencia de la cuestión debatida resulta conveniente un ámbito de debate amplio y de demostraciones científicas necesarias, no constituyendo la vía del amparo -por la estrechez de sus términos- el trámite adecuado.** Al respecto, y habiendo examinados los autos, **me permito señalar enfáticamente que la cuestión no requiere de mayor amplitud en cuanto a "debate y prueba"**. Pues bien, por medio del presente **se discute sobre actos que atentan contra el medio ambiente, repercutiendo de manera directa en la salud de los vecinos** de la ciudad de San Jorge, lo que importa que **existe un factor de urgencia que no puede ser atendido si no es por medio del amparo**; así lo plantearon los actores y así lo entendió el juez a quo, al franquear esa vía con respaldo constitucional. Al respecto Gozaíni afirma que ubicar el contenido específico de la pretensión para comparar las posibilidades del amparo ante los demás procesos comunes será tarea para la función jurisdiccional, pues al abrirse el abanico de materias protegidas como “nuevos derechos y garantías”, presenta como hipótesis que **la única vía útil y efectiva sea la garantía procesal del art. 43**. Por eso cuando debamos referirnos a la necesidad de un debate mayor, el núcleo de atención habrá de radicar en el objeto material solicitado y en las facultades de actuación efectiva que tenga la magistratura para obrar con la rapidez y expeditividad que está reclamando el amparo. Y sabiamente afirma este autor que **la brevedad que caracteriza al amparo no afecta el conocimiento del juez sobre el foco litigioso, en tanto el amparista no sufre cortapisas en su derecho de alegación, siempre que conduzca la denuncia al problema constitucional; que el sujeto pasivo tampoco sacrifica el derecho al contradictorio; y que la mejora en el debate no se logra postergando al amparo o remitiendo la causa a un procedimiento diferente que, "mutatis mutandis", no tiene la especialidad que goza el proceso constitucional** (Gozaíni, Osvaldo Alfredo “El Derecho de Amparo”, Ed. Depalma, 1995, pág. 43 y 44).”*

También en el orden local los tribunales han sostenido en repetidas ocasiones

⁶ “Peralta, Viviana c/ Municipalidad de San Jorge y otros s/ Amparo” Expte. N° 198 - Año 2009, sentencia de fecha 9-12-2009.

que el plexo normativo conformado por los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, 37 y 41 de la Carta Magna de Tucumán, y 71 del CPC, contempla expresamente al amparo constitucional como una vía para dirimir las controversias que tengan por objeto la presunta afectación de la salud pública y el medio ambiente (Cámara Civil y Comercial Común, Sala 3, s/ Amparo, sentencia 335 del 6-12-2010, Registro: 00028997-02; Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala 2, s/ Amparo, sentencia 738 del 25-11-2010, Registro: 00028768-01, entre otros).

En definitiva se hallan reunidos en estos actuados los presupuestos que tornan plenamente admisible la vía del amparo utilizada para hacer cesar el proceso de daño ya iniciado.

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN

La calificación de histórica e inmemorial de una actividad productiva, como aducen las firmas demandadas, no significa luz verde para contaminar y hacer recaer en la población las externalidades negativas que aquélla conlleva. Tampoco la denominación de zona rural, cada vez más poblada por el reordenamiento territorial de los últimos tiempos, lleva per se la validación de los costos de un modelo o forma de desarrollo por más antiguo que se precie.

Como enseña Ricardo Lorenzetti⁷, la noción de externalidad negativa o costo social de la conducta individual ha sido un aporte fundamental para el ambientalismo. Este aspecto, habitualmente ignorado, fue incorporado en los análisis económicos y en el derecho, y sirvió para señalar muchas situaciones en que hay unas consecuencias del obrar individual que otros soportan. Profundizando en la temática agrega que **“...las empresas cuyas actividades contaminan, no toman en cuenta estos costos, pues son transferidos a otras personas o a la comunidad en su conjunto, recibiendo sólo el beneficio por su actividad. Al externalizar estos costos, no tienen incentivos en reducir el nivel de polución que causan con la producción de bienes y servicios rentables... El gran cambio se produce cuando se "internalizan" esos costos porque la sociedad ya no quiere soportarlos. Ello se ve claramente en las indemnizaciones por daños ambientales que deben pagar las empresas, pero también en las exigencias de transformación de los mecanismos de producción de bienes, obligándolas a incorporar nuevas tecnologías "limpias" cuyo costo deben soportar.”**

En nuestra querida Provincia, han sido de público y notorio conocimiento las

⁷ "Teoría del Derecho Ambiental", Editorial Porrúa, 2008, México, págs. 26-27.

noticias que dan cuenta de condenas por contaminación y denuncias por posible degradación ambiental vinculadas a la actividad desplegada por los ingenios azucareros (<https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/santiago-del-estero-condenaron-a-tres-anos-de-prision-por-contaminacion-ambiental-a-dos-responsables-de-un-ingenio-azucarero-y-ordenaron-medidas-de-reparacion/> ; <https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/tucuman-allanan-tres-ingenios-azucareros-por-posible-contaminacion-ambiental/>), lo que pone al descubierto la urgencia de transformaciones necesarias en la industria que permitan alcanzar un desarrollo sustentable y de ese modo garantizar el derecho de todos los habitantes a vivir en un ambiente sano (art. 41, CN).

VII. PETITORIO


Por lo expuesto a V.S. pedimos que:

1. Tenga por contestadas las defensas opuestas por la parte demandada.
2. En oportunidad de dictar sentencia, las rechace.

Resolviendo de conformidad

HARÁ JUSTICIA


Gonzalo
Gregorio Elías
34160155


María Eugenia
Sesto Cebal
26685498

PRESENTAMOS NUEVA DOCUMENTACIÓN

JUICIO: “SESTO CABRAL MARÍA EUGENIA Y GONZÁLEZ EXEQUIEL ELÍAS c/ SOTILLO SILVIO CARLOS Y OTROS s/ AMPARO AMBIENTAL” Expte. N° 149/23

Señora Jueza Civil y Comercial Común

María Eugenia Sesto Cabral y Exequiel Elías González, amparistas en autos, con el patrocinio letrado de **Adriana García Romano**, a V.S. con respeto decimos:

I. OBJETO

En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 439 del CPC y C presentamos la documentación a la que se hará referencia infra.

Por las razones que expondremos, pedimos que se admita su incorporación.

II. FUNDAMENTOS

1. Aplicación del art. 439 de la ley 9.531

La norma del mentado precepto -de aplicación supletoria en virtud de lo previsto en el art. 31 del CPC-, bajo el título “Documentos de presentación posterior”, reza:

“Trabada la litis, sólo podrán ser admitidos los documentos de fecha posterior a la demanda y/o contestación de demanda.”

“También podrán ser admitidos los de fecha anterior, si se demostrare que existió un impedimento legal o de hecho insalvable para presentarlos en su oportunidad.”

“Si la presentación fuere anterior a la celebración de la Primera Audiencia, en ésta el tribunal resolverá sobre su admisión, previo oír a la contraparte. En caso de ser admitidos, se ordenará que sean exhibidos a la contraria a los efectos de lo dispuesto por los Artículos 340 a 346. Si la presentación fuere posterior a la celebración de la Primera Audiencia, se procederá de igual manera en la Segunda Audiencia.”

Conceptualizando a los “nuevos documentos” Juan Manuel Hitters¹ enseña que son todos aquellos que tuvieron fecha posterior a la traba de la litis, o que **sean conocidos por las partes luego de dicha oportunidad**. Destaca además que, si estos documentos se conocieran después de entablada la demanda y antes de su notificación, el accionante podrá ejercer –obviamente- la facultad de ampliarla, según lo normado en el art. 331 del CPCCN (en el caso del digesto procesal civil y comercial local de acuerdo a lo preceptuado en el art. 419).

Enfatizando sobre su finalidad el citado autor afirma que “[l]os ‘nuevos documentos’ podrán ser **utilizados para acreditar tanto lo invocado en los escritos constitutivos** como en los hechos nuevos o sobrevinientes. Será necesario –entonces- que **el hecho vinculado al documento ya se encuentre referido en alguna pieza del expediente**. De lo contrario, deberá ingresar por el carril del hecho nuevo.”

2. Oportunidad. Concurrencia de impedimento insalvable

En la especie, el hecho vinculado a los dos instrumentos que añadimos, ha sido invocado y expresamente referido por el coaccionado Silvio Sotillo en su presentación de fecha 17-10-2023, al evacuar el pedido de información que le fue requerida (art. 21 CPCC) y oponer sus defensas.

En esa pieza procesal, en la página 15 bajo el título “B- Produzco Informe”-, invocando su condición de ingeniero agrónomo y asesor técnico de la firma Agropecuaria Don Eduardo S.A. (ADESA) que, según sus dichos, es la empresa de la cual su esposa es presidenta y que explotaría los campos linderos a nuestra vivienda familiar donde se llevaron a cabo las fumigaciones terrestres denunciadas, el codemandado Sotillo afirma textualmente que:

“B3. ADESA utiliza aplicaciones de productos fitosanitarios que se encuentran registrados por SENASA y el 2 4 D Amina, sí está permitido. Cuya factura de compra y receta agronómica se adjunta, la que utiliza con precisión por su elevado costo...”

Y efectivamente adjunta en fecha 18-10-2023, la Factura A de compra a Agroempresa Semillas S.A. en cuyo detalle se consigna “**2,4D AMINA 80.4 % DIMETILAMINA + DIETANOLAMINA**” y la Receta Agronómica datada el 8-9-2023, en la que se individualiza el producto adquirido por ADESA para tratar el cultivo de *caña de azúcar*, del siguiente modo:

¹ “Hechos Nuevos, Hechos Sobrevinientes y Nuevos Hechos”, publicado en la página de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires [file:///C:/Users/flang/Downloads/hechos-unificado\[1\]%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/flang/Downloads/hechos-unificado[1]%20(2).pdf).

*** Principio activo: 2,4D Amina 80,4%. Nombre comercial: KRYNN DUO**

Como se desprende del escrito inicial, allí señalamos que en las pulverizaciones en cuestión se utilizó, entre otros, el herbicida 2,4D, que se emplea habitualmente en la zona.

Ahora bien, resulta evidente que nuestra parte estaba impedida de conocer el formulado comercial y la marca del agroquímico 2,4D utilizado por la contraparte al momento de promover el amparo ambiental de referencia, por ser ajena a la relación comercial entre la compradora y la vendedora del producto. Al no poder tener acceso ni a la factura ni a la receta agronómica respectiva, por tratarse de documentación perteneciente a la firma aplicadora de la que somos ajenos ha mediado una imposibilidad de hecho insalvable que patentiza la concurrencia en este caso del presupuesto contemplado en el aludido art. 439 segundo párrafo de la ley de rito.

En ese sentido la jurisprudencia local, admitió la aplicación de la norma (ex artículo 280 de la ley 6.176) al considerar que:

*“Está claro que al ser el actor un tercero al contrato de seguro, celebrado por el demandado con la aseguradora, **existe para él indudablemente un impedimento de hecho insalvable para presentar la documentación acreditativa del pago de las primas, conjuntamente con el escrito de demanda (art. 279 CPCC).** Es que no puede exigirse al actor, que siendo un tercero al contrato de seguro que liga al demandado con su asegurador, tenga en su poder las constancias documentales probatorias del pago de la prima, cuyo pago había sido desconocido por el asegurador. Por lo tanto **debe admitirse en el actor la existencia de un impedimento insalvable de presentar la documentación anterior a la demanda perteneciente al asegurado,** por lo que si éste logró obtenerla por cualquier medio, debe ser admitida su presentación con posterioridad a la demanda en los términos del art. 280 del CPCC.”(Cám. C y CC, Sala 3, s/Daños y perj., sentencia 162 del 18/4/16, Registro: 00044771-01).*

Recién con la referencia y prueba proporcionada por el coaccionado Sotillo pudimos acceder a los instrumentos -que acompañamos- del formulado **KRYNN DUO** que la empresa productora Atanor S.C.A. publica en internet:

i) Etiqueta (<https://albaugh.com.ar/backend/34045%20-%20Krynn%20Duo%20-%20Rev.%2003.pdf>).

Nótese que la imposibilidad de saber qué formulado comercial aplica la contraria, evidencia lo que normalmente ocurre en los conflictos ambientales, en los que se enfrenta una parte débil -como las personas aquí amparistas vecinas de los campos fumigados- contra otra más poderosa sea en términos económicos (cualquier empresa o industria) -en estos actuados, el grupo empresario demandado- o políticos (el Estado nacional, provincial o municipal), en reclamo de la modificación o suspensión -como sucede en el sub lite con las pulverizaciones denunciadas- de una cierta actividad como del cumplimiento de una obligación soslayada. Y esa situación es compensada con la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que consiste en asignar la tarea de demostración a aquella parte que, por su mayor manejo o acceso a la información, facilidad o eficiencia operativa, esté en mejor situación o tenga menos inconvenientes para hacerlo.²

En ese orden de ideas, es dable recordar que el artículo 8 numeral 3 inciso e) del Acuerdo de Escazú, contempla entre las medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba.

III. RELEVANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN

Seguidamente ponemos de resalto el contenido de los nuevos instrumentos que asume relevancia a la hora de demostrar los graves peligros que conlleva la sustancia aplicada, en algunos casos, a cero metros de distancia de nuestra residencia.

1. La Etiqueta

Surge del documento que:

* La composición del herbicida es:

2,4-D: mezcla de sales de dimetilamina y dietanolamina de 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético)	80,4 g*
Coadyuvante y solvente c.s.p.....	100 cm3

* La Etiqueta debe ser leída **íntegramente antes de utilizar** el producto.

* La peligrosidad desde el punto de vista de la toxicidad aguda es alta, pues el herbicida está clasificado como **banda toxicológica amarilla**, con **categoría II. Moderamente peligroso**.

² CATALANO Mariana, “Prueba ambiental y teoría de la prueba”, RDAmb 55, 28/09/2018, 89, Cita Online: AR/DOC/3405/2018.